

**2.20. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA (pp. 2-32)**

—

**2.20. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA (pp. 33-62)**

ANTONIO CARDESA SALZMANN

*Investigador postdoctoral*

*Universitat Rovira i Virgili*

**Sumario:** 1. Consideraciones introductorias. 2. Recursos por incumplimiento (artículo 258 TFUE/ex artículo 226 TCE). 2.1 Conservación de la flora y fauna. 2.2. Programas de seguimiento del estado de las aguas. 2.3. Evaluación del impacto ambiental. 3. Cuestiones prejudiciales (artículo 267 TFUE / ex artículo 234 TCE). 3.1. Cuestiones prejudiciales de interpretación. A. Acceso del público a la información medioambiental. B. Participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. C. Evaluación del impacto ambiental. D. Seguridad de la biotecnología: indemnización de los operadores en el sector agroalimentario cuyos cultivos resultan ‘contaminados’ por polen genéticamente modificado. 3.2. Cuestiones prejudiciales de validez.

## **1. Consideraciones introductorias**

En el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de mayo de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en once asuntos relacionados con el Derecho ambiental. Entre ellas cinco fueron dictadas en el marco de procedimientos incoados por la Comisión Europea sobre la base del artículo 258 TFUE en relación con el incumplimiento de varias directivas en materia de conservación de la flora y fauna, de establecimiento y aplicación de programas de seguimiento del estado de las aguas continentales superficiales y de evaluación del impacto ambiental de determinados proyectos públicos y privados.

Por otro lado, el Tribunal ha dictado en dicho período seis sentencias resolviendo peticiones de decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez de de distintas disposiciones de Derecho ambiental de la Unión Europea. En particular, cinco peticiones de decisión prejudicial tenían por objeto la interpretación de distintas disposiciones en materia de acceso del público a la información medioambiental, de participación del público en la toma de decisiones y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y en materia de evaluación del impacto ambiental. Asimismo, por su interés y trascendencia, se incluyen en la presente crónica las conclusiones del Abogado General Yves BOT relativas a la petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof de Munich en el asunto Bablok et al. c. Freistaat Bayern. La futura sentencia del Tribunal de Justicia relativa a este asunto está llamada a marcar un importante hito jurisprudencial relativo a la indemnización de los operadores económicos en el sector agroalimentario, cuyos cultivos resulten ‘contaminados’ por polen de plantas genéticamente modificadas.

La única sentencia dictada en el marco de una cuestión prejudicial de validez confirma la adecuación del fondo y de la forma de la Directiva 2006/134/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Directiva

91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa fenarimol<sup>1</sup> a los principios generales del Derecho de la Unión Europea.

## **2. Recursos por incumplimiento (artículo 258 TFUE/ex artículo 226 TCE)**

### *2.1. Conservación de la flora y fauna*

En el período comprendido en esta crónica, el Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el marco de dos recursos presentados por la Comisión Europea contra Estados miembros por el incumplimiento de las obligaciones que les incumben bajo el Derecho de la Unión Europea en materia de conservación de la flora y fauna.

En primer lugar, la *sentencia del Tribunal de Justicia (Sala cuarta) de 11 de noviembre de 2010, asunto C-164/09, Comisión Europea c. República Italiana* declara el incumplimiento de dicho Estado miembro de las obligaciones que el incumben en virtud del artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves salvajes, en la medida en que consideraba probado que la Región de Venecia había adoptado y aplicado una reglamentación —la Ley de la Región de Venecia núm. 13, de 12 de agosto de 2005<sup>2</sup>— que contemplaba excepciones a la prohibición de la caza de dichas aves, que no eran compatibles con las condiciones fijadas a este respecto en el artículo 9 de dicha Directiva. En particular, según la apreciación del Tribunal, la ley regional en cuestión contemplaba un régimen de excepciones a la prohibición general de la caza respecto de determinadas especies de aves incluidas en el anexo II de la Directiva 79/409 que no se justificaba como medida excepcional de aplicación concreta para responder a exigencias precisas en situaciones específicas tales como las contempladas en el artículo 9.1 de la Directiva<sup>3</sup>. Por otro lado, el Tribunal consideró probado que la aplicación del régimen de excepciones establecido en la ley regional de Venecia permitía un volumen de caza de las especies de aves silvestres en cuestión que no era compatible con el criterio de la caza ‘selectiva’ de dichas aves y ‘en pequeñas cantidades’ que se deriva del artículo 9.1, c) de la Directiva<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> DOUE, L 349, de 12 de diciembre de 2006, p. 32-36.

<sup>2</sup> BUR Veneto n° 77, de 16 de agosto de 2005.

<sup>3</sup> Sentencia, §§ 23-30.

<sup>4</sup> *Ibíd.*, §§ 35-41.

Por otro lado, la *sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de diciembre de 2010, asunto C-340/09, Comisión Europea c. Reino de España*, declara el incumplimiento de la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos<sup>5</sup> por parte de dicho Estado miembro. En particular, el Tribunal de Justicia estima el recurso de la Comisión Europea al apreciar que la disposición transitoria única de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos<sup>6</sup> no es compatible con las obligaciones que el artículo 4 de la Directiva impone a los Estados miembros. De conformidad con esta última disposición, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que en un plazo de cuatro años tras su entrada en vigor, cada parque zoológico disponga de una autorización válida, que asegure el cumplimiento de los estándares fijados en la Directiva. Antes de conceder o denegar dicha autorización, la autoridad competente debe realizar una inspección preceptiva a las instalaciones de cada parque zoológico que la solicite, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de autorización. Finalmente, también se establece que los parques que no cuenten con autorización o no cumplan las condiciones en ella impuestas, deberán ser cerrados por la autoridad competente. Al trasponer estas disposiciones al ordenamiento jurídico español, la disposición transitoria única de la Ley 31/2003 obligaba a los parques zoológicos abiertos al público en la fecha de su entrada en vigor a solicitar la correspondiente autorización en el plazo de un año, transcurrido el cual sin haberse presentado la solicitud, habrían de cerrar sus instalaciones. No obstante, una vez solicitada, la autorización se podía entender concedida por silencio administrativo, si no se notificaba la resolución correspondiente en el plazo de seis meses.

En el marco del procedimiento, la Comisión Europea estuvo en condiciones de probar que numerosos parques zoológicos habían obtenido dicha autorización por silencio administrativo, sin que la autoridad competente hubiese realizado la inspección preceptiva para averiguar que las instalaciones cumplieran los estándares exigidos por la Directiva<sup>7</sup>. En particular, estos parques se encontraban en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, País Vasco, Canarias, Cantabria, Castilla-

---

<sup>5</sup> DOCE, L 94, de 9 de abril de 1999, p. 24-26.

<sup>6</sup> BOE núm. 258, de 28 de octubre de 2003.

<sup>7</sup> Sentencia, §§ 40 y 41.

La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

## *2.2. Programas de seguimiento del estado de las aguas*

En el presente apartado haremos breve mención de la *sentencia del Tribunal de Justicia (Sala primera) de 22 de diciembre de 2010, as. C-351/09, Comisión Europea c. República de Malta*, en la que resuelve un recurso de incumplimiento basado en el incumplimiento de dicho Estado miembro de sus obligaciones de elaborar un programa de seguimiento del estado de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas en los términos del artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas<sup>8</sup>, y de informar periódicamente al respecto en los términos de su artículo 15.2.

En octubre de 2007, Malta transmitió un resumen sobre la aplicación del programa de seguimiento de las aguas de conformidad con el artículo 15.2 de la Directiva, que en opinión de la Comisión no abordaba las aguas superficiales, razón por la cual abrió la fase precontenciosa del procedimiento por incumplimiento, dirigiéndole un dictamen motivado. Sin negar el carácter incompleto de su informe, Malta se limitó a contestar anunciando que presentaría la información restante en marzo de 2010, junto con el primer plan de gestión de la captación de aguas. Transcurrido el plazo otorgado por la Comisión para subsanar la situación de incumplimiento sin que Malta hubiese cumplido con los requisitos establecidos en el dictamen motivado, se abrió la fase contenciosa del procedimiento.

En la medida en que Malta no contestó formalmente ninguna de las imputaciones realizadas por la Comisión en su dictamen motivado, el Tribunal de Justicia rechazó por extemporáneas las alegaciones posteriormente presentadas por dicho Estado Miembro ya en fase contenciosa. Por consiguiente, basándose en las cuestiones de hecho y de derecho establecidas en el dictamen motivado, el Tribunal de Justicia estimó el incumplimiento de las obligaciones que le incumben a Malta en virtud del artículo 8.1 y 2, y del artículo 15.2 de la Directiva 2000/60/CE, al considerar probado que dicho Estado miembro no había puesto en funcionamiento un plan de seguimiento

---

<sup>8</sup> DOCE, L 327, de 22 de diciembre de 2000, p. 1-73.

sobre el estado de las aguas continentales superficiales y, por consiguiente, no había informado al respecto a la Comisión.

### *2.3. Evaluación del impacto ambiental*

El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia dictó dos sentencias relativas al incumplimiento por Irlanda y Bélgica, respectivamente, al incumplir la normativa interna de transposición varias disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente<sup>9</sup>.

En la *sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de marzo de 2011, asunto C-50/09, Comisión Europea c. Irlanda* se declara que este Estado miembro incumple sus obligaciones bajo el Derecho de la Unión Europea en la medida en que no había adaptado correctamente su legislación interna a la Directiva 85/337. En primer lugar, el Tribunal estimó que la legislación irlandesa no transponía correctamente el artículo 3 de la Directiva, puesto que el artículo 173 de la Planning and Development Act 2000 (PDA) sólo obliga a la autoridad de ordenación del territorio a tomar en consideración —al final del proceso de autorización de un proyecto— los datos previamente recogidos sobre su impacto ambiental. Acogiendo la posición sostenida por la Comisión Europea, el Tribunal consideró que ello no se corresponde con la obligación más amplia del artículo 3 de la Directiva, que no sólo exige una recopilación y descripción de los efectos directos e indirectos del proyecto sobre distintos factores, sino que obliga a la autoridad medioambiental a realizar una evaluación sustantiva de su impacto que considere los factores enunciados en dicha disposición.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia también declaró el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 85/337, en la medida en que la legislación irlandesa no aseguraba plenamente que, en caso de competencia concurrente de la Autoridad de la ordenación del territorio y la Agencia de protección medioambiental para la concesión de autorizaciones para la realización de proyectos industriales, bajo la PDA y la Environmental Protection Agency Act 1992 (EPAA), que ambas

---

<sup>9</sup> DOCE, L 175, de 5 de julio de 1985, p. 40-48.

autoridades desempeñasen sus funciones de conformidad con las exigencias de los artículos 2 a 4 de la misma. En estas circunstancias específicas la normativa irlandesa no asegura, según la apreciación del Tribunal una evaluación integral del impacto ambiental, puesto que

... no se puede excluir que la [Agencia de protección medioambiental], como autoridad encargada de pronunciarse sobre la autorización de un proyecto en cuestiones ligadas a la contaminación, se pronuncie sin que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental de conformidad con los artículos 2 a 4 de la Directiva...<sup>10</sup>.

En tercer y último lugar, el Tribunal también estimó que la legislación irlandesa no trasponía correctamente la Directiva 85/337, al excluir expresamente las obras de demolición de la obligación de evaluación del impacto ambiental.

Asimismo, la *sentencia del Tribunal de Justicia (Sala tercera) de 24 de marzo de 2011, asunto C-435/09, Comisión Europea c. Reino de Bélgica* declara el incumplimiento de las obligaciones que incumben a dicho Estado en virtud de la Directiva 85/337 por la falta de transposición correcta o completa de algunas de sus disposiciones en la legislación de la Región flamenca, la Región valona y la Región Bruselas-Capital.

### **3. Cuestiones prejudiciales (artículo 267 TFUE/ex artículo 234 TCE)**

#### *3.1. Cuestiones prejudiciales de interpretación*

##### **A. Acceso del público a la información medioambiental**

En diciembre de 2010, el Tribunal de Justicia dictó dos sentencias prejudiciales que abordan la cuestión del acceso del público a la información medioambiental.

En la primera de ellas, la *sentencia de 16 de diciembre de 2010, asunto C-266/09, Stichting Natuur en Milieu et al. c. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden*, el Tribunal resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven

---

<sup>10</sup> Sentencia, § 81.

(Países Bajos) en el marco de un recurso interpuesto por las asociaciones actoras contra una resolución del College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB), mediante la cual les denegó comunicarles determinados estudios y protocolos de pruebas relativos a los residuos y a la eficacia de la sustancia activa *propamocarb* en la lechuga. Estos estudios y protocolos habían servido de base para la modificación en 1999 de la Orden Ministerial holandesa sobre residuos de plaguicidas, fijando el nuevo contenido máximo autorizado de residuos del plaguicida *propamocarb* en la lechuga en 15 mg/kg.

La petición del tribunal de remisión tenía por objeto la interpretación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios y de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental.

En particular, mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal de remisión solicitaba que el Tribunal de Justicia determinase si los estudios y protocolos de estudio sobre el terreno relativos la eficacia del *propamocarb* en la lechuga, que habían servido de base para la modificación en 1999 de la Orden ministerial, incrementando el contenido máximo autorizado de sus residuos en la lechuga, constituyen ‘información medioambiental’ en el sentido del artículo 2.1 de la Directiva 2003/4/CE y quedan por consiguiente cubiertos por su ámbito de aplicación<sup>11</sup>.

El Tribunal de Justicia responde afirmativamente a dicha cuestión prejudicial, tomando en consideración que la resolución recurrida por las asociaciones actoras en el litigio principal se inscribe en un procedimiento de autorización de un producto fitosanitario incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 91/414/CEE, que tiene por objeto la evaluación de los riesgos y peligros para las personas, los animales y el medio ambiente. Precisamente, en los términos del artículo 2.1, f) de la Directiva 2003/4/CE, debe entenderse por ‘información medioambiental’ a los efectos de la misma

... el estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria..., cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a)

---

<sup>11</sup> Sentencia, § 37.



o a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c)<sup>12</sup>.

Así pues, en la medida en que la aportación de datos sobre la presencia de residuos de productos fitosanitarios en vegetales permite contrastar el contenido máximo autorizado para el pesticida en cuestión y limitar así los riesgos de impacto sobre los componentes de la diversidad biológica y de la dispersión de dicho factor químico en elementos del medio ambiente tales como el suelo o las aguas subterráneas, debe ser considerada ‘información medioambiental’<sup>13</sup>.

Por medio de la segunda cuestión prejudicial, el tribunal de remisión solicitaba que el Tribunal de Justicia dilucidase la relación entre el artículo 14 de la Directiva 91/414/CEE y el artículo 4.2 de la Directiva 2003/4/CE. El artículo 14 de la Directiva 91/414 establece el procedimiento en virtud del cual la Comisión o los Estados miembros, previa solicitud de la parte interesada, deberá proteger la confidencialidad de la información que constituya secreto industrial o comercial y que dicha parte ha transmitido en el marco del procedimiento de autorización de un producto fitosanitario. De conformidad con el quinto guión del párrafo segundo de dicha disposición, la protección de la confidencialidad no podrá aplicarse “al resumen de los resultados de las pruebas para determinar la eficacia del producto y su inocuidad para el hombre, los animales, los vegetales y el medio ambiente”.

Por su parte, el artículo 4 de la Directiva 2003/4 regula las excepciones a la obligación de las autoridades públicas a poner a disposición de cualquier solicitante la información medioambiental, entre cuyas causas el párrafo 2, d) hace referencia expresa a la afectación a “la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial cuando dicha confidencialidad esté contemplada en la legislación o comunitaria a fin de proteger intereses económicos legítimos...”. No obstante, los motivos de denegación que contempla el artículo 4 deben ser interpretados

---

<sup>12</sup> De conformidad con dichas disposiciones, forma parte del concepto legal de ‘información medioambiental’ toda información relativa a: “... la situación de elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos; b) factores como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a); c) medidas (incluidas las medidas administrativas) como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos; ...” (art. 2.1 Directiva 2003/4/CE).

<sup>13</sup> Sentencia, §§ 38-43.

restrictivamente, "... teniendo en cuenta para cada caso concreto el interés público atendido por la divulgación...", que "... deberá ponderarse [en cada caso específico] con el interés atendido por la denegación de la divulgación". Aún así, el interés en la protección de la confidencialidad de los datos de carácter comercial e industrial no puede justificar en ningún caso la denegación de solicitudes relativas a información sobre emisiones en el medio ambiente (artículo 4.2 Directiva 2003/4).

De conformidad con la posición adoptada por el Tribunal de Justicia, "... lo dispuesto en el ... artículo 14 [de la Directiva 91/414] debe interpretarse en el sentido de que sólo resulta aplicable en la medida en que no afecte negativamente al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del [artículo 4.2] de la Directiva 2003/4"<sup>14</sup>, esto es, la imposibilidad de negar solicitudes de información medioambiental que pudiesen afectar negativamente a la confidencialidad de datos industriales o comerciales, cuando éstos hacen referencia a emisiones en el medio ambiente.

Mediante su tercera y última cuestión prejudicial, el tribunal remitente pedía que el Tribunal de Justicia dilucidase si la obligación impuesta a las autoridades competentes de ponderar caso por caso el interés público atendido por la divulgación información medioambiental y el interés específico atendido por la preservación de su confidencialidad en virtud del artículo 4.2 de la Directiva 2003/4/CE podía ser definida en una medida general adoptada por el legislador nacional, tal como sucede en el artículo 22 de la Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Ley neerlandesa de plaguicidas). A este respecto, el Tribunal es taxativo al reafirmar la obligatoriedad de la ponderación caso por caso del interés público en la divulgación de la información ambiental con el interés específico en la preservación de su confidencialidad. Sin embargo, admite la posibilidad de que el legislador "... pueda establecer mediante una disposición de carácter general criterios que permitan facilitar esa apreciación comparada de los intereses en juego", en cada caso específico<sup>15</sup>.

En su *sentencia de 22 de diciembre de 2010, asunto C-524/09, Ville de Lyon c. Caisse des dépôts et consignations* el Tribunal de Justicia resuelve una petición de decisión prejudicial del Tribunal administratif de Paris presentada en el marco del recurso contencioso-administrativo planteado por la Ville de Lyon contra la decisión de la

---

<sup>14</sup> *Ibíd.*, § 54.

<sup>15</sup> *Ibíd.*, § 58.

Caisse des dépôts et consignations (CDC) de denegarle el acceso a la información relativa al volumen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero vendidos durante el año 2005 por los titulares de las plantas de calefacción urbana situadas en Francia, sobre la base del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 2216/2004 y en los puntos 11 y 12 del anexo XVI del mismo.

El Tribunal de Justicia abordó en primer lugar la segunda cuestión prejudicial, en virtud de la cual el Tribunal administratif de Paris pedía que se dilucidase si la comunicación de los datos e informaciones que solicitaba la Ville de Lyon se debe regir por alguna de las excepciones previstas en el artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE o por las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad<sup>16</sup>, y del Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE<sup>17</sup>. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que, por contraposición al régimen general de acceso del público a la información establecido en el artículo 17 de la Directiva 2003/87/CE —que remite a la Directiva 2003/4— el artículo 19 de la Directiva 2003/87/CE regula el registro que cada Estado miembro debe crear para llevar cuenta exacta de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de derechos de emisión, estableciendo para tales datos “... un *régimen específico y exhaustivo* de comunicación al público ... y de confidencialidad de los mismos”<sup>18</sup>.

A continuación, el Tribunal de Justicia pasa a abordar de manera conjunta la tercera y cuarta cuestión prejudicial, que estaban dirigidas a dilucidar si, en virtud de los puntos 11 y 12 del anexo XVI del Reglamento (CE) nº 2216/2004, la publicación de datos como los solicitados por la Ville de Lyon debe realizarse una vez finalizado el plazo de cinco años posterior al año en que se complete cada transacción con derechos de emisión, o si se trata de la publicación de la información correspondiente a todas las transacciones realizadas durante un período quinquenal de asignación bajo la Directiva 2003/87. En caso de que su publicación deba realizarse una vez finalizado el plazo de cinco años posterior al año en que se complete cada transacción, el Tribunal

---

<sup>16</sup> DOUE, L 275, de 25 de octubre de 2003, p. 32-46.

<sup>17</sup> DOUE, L 386, de 29 de diciembre de 2004, p. 1-77.

<sup>18</sup> Sentencia, § 40 (énfasis propio).

administratif de Paris solicitaba saber, además, si el motivo alegado por la Ville de Lyon —la renegociación de un convenio de arrendamiento con la operadora de una instalación de calefacción urbana— constituía un motivo suficiente para levantar la confidencialidad de la información solicitada bajo el artículo 10.1 del Reglamento. De conformidad con dicha disposición, “[t]oda la información contenida en los registros y en el [diario independiente de transacciones comunitarias], lo cual incluye los haberes de todas las cuentas y la totalidad de las transacciones efectuadas, se considerará confidencial *para cualquier efecto que no sea la aplicación de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, en la Directiva 2003/87/CE o en la legislación nacional*”<sup>19</sup>.

A este respecto, el Tribunal de Justicia constata que lisa y llanamente que el motivo invocado por la Ville de Lyon no constituye, en principio, una actividad de aplicación de los requisitos establecidos en el Reglamento, en la Directiva o en la legislación nacional<sup>20</sup>. Por otro lado, el Tribunal interpreta los artículos 9 y 10 del Reglamento, en relación con los puntos 11 y 12 de su anexo XVI en el sentido de que, si no existe consentimiento previo de los titulares de las cuentas correspondientes en el registro, los datos en él consignados sólo son de libre consulta por el público en general a partir del 15 de enero del quinto año (X+5) siguiente al año (X) en que se completen las transacciones relativas a las transferencias de derechos<sup>21</sup>.

Por último, el Tribunal de Justicia aborda la primera de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional de remisión, que está dirigida a saber si el administrador del registro nacional es competente para denegar la comunicación de los datos asentados en el registro, cuya comunicación a través de la página web del diario independiente de transacciones comunitarias (DITC) es sin embargo competencia del administrador central nombrado por la Comisión Europea.

Sobre este particular, el Tribunal interpreta los artículos 9 y 10 del Reglamento (CE) n° 2216/2004, en relación con los puntos 11 y 12 de su anexo XVI, en el sentido según el cual el administrador central es ciertamente el único competente para comunicar al público en general los datos como los solicitados por la Ville de Lyon, una vez que ha transcurrido el plazo de cinco años desde la conclusión de la transacción de derechos de emisión. Hasta entonces, no obstante, es el administrador

---

<sup>19</sup> Énfasis propio.

<sup>20</sup> Sentencia, § 48.

<sup>21</sup> *Ibíd.*, §§ 51-53.

del registro nacional quien debe denegar una solicitud de acceso a dichos datos, ya que está obligado a preservar la confidencialidad de los mismos a no ser que exista consentimiento previo de los titulares de las cuentas correspondientes<sup>22</sup>.

#### B. Participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente

En el período comprendido en esta crónica, el Tribunal de Justicia ha dictado dos sentencias relativas a peticiones de decisión prejudicial relativas a la participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En la primera de ellas, el Tribunal ha declarado la ausencia de efecto directo del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus. En la segunda, el Tribunal ha declarado el efecto directo del artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente<sup>23</sup>, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003<sup>24</sup>, y su aplicación preferente sobre las disposiciones de la *Verwaltungsgerichtsordnung* —la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa alemana— que limitan la legitimación activa para la interposición de un recurso de anulación de un acto administrativo a aquéllos supuestos en los que el demandante demuestre la lesión de sus derechos subjetivos públicos por el acto administrativo.

Mediante su *sentencia de 8 de marzo de 2011, asunto C-240/09, Lesoochránárske zoskupenie VLK c. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky*, el Tribunal de Justicia —en su formación de Gran Sala— resolvió una petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Eslovaquia), en relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una organización ecologista contra la desestimación de su recurso contra una decisión del Ministerio de medio ambiente eslovaco denegándole su personación como parte en un procedimiento administrativo relativos a la concesión de excepciones al régimen de protección de especies protegidas —en particular, el oso pardo— al acceso a los

---

<sup>22</sup> *Ibíd.*, §§ 55-59.

<sup>23</sup> Véase nota núm. 9.

<sup>24</sup> DOUE, L 156, de 25 de junio de 2003, p. 17-25.

espacios naturales protegidos y a la utilización de productos químicos en dichos espacios.

A este respecto, la parte actora invocaba las disposiciones del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998, del cual son parte la Unión Europea y sus Estados miembros, alegando su ‘efecto directo’ de conformidad con el Derecho de la Unión. De conformidad con dicha disposición del Convenio de Aarhus,

...cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional.

En este contexto, el tribunal de remisión planteó las siguientes cuestiones prejudiciales:

- 1) A la luz del objetivo principal perseguido por el Convenio de Aarhus, a saber, reformar el concepto clásico de legitimación activa reconociendo la posición de parte procesal al público, o bien al público interesado, ¿puede reconocerse al artículo 9 de dicho tratado internacional, y en particular a su apartado 3, la eficacia autoejecutiva de los tratados internacionales, puesto que la Unión Europea se adhirió a dicho Convenio..., pero no ha adoptado todavía normas para adaptar el ordenamiento jurídico comunitario a aquél?
- 2) ¿Puede reconocerse al artículo 9 del Convenio de Aarhus, en particular a su apartado 3, una vez integrado en el ordenamiento jurídico comunitario, la aplicabilidad inmediata o la eficacia directa del Derecho comunitario de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia?
- 3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda, ¿puede interpretarse el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, a la luz del objetivo principal perseguido por dicho convenio internacional, en el sentido de que por “acci[ón] de autoridades públicas” debe entenderse también la adopción de una decisión? Es decir, el derecho del público a participar en un procedimiento judicial, ¿comprende el derecho a impugnar las decisiones de una autoridad pública cuya ilegalidad repercute en el medio ambiente?<sup>25</sup>

La Gran Sala aborda las dos primeras cuestiones prejudiciales de manera conjunta. Para ello, parte de la premisa del carácter vinculante para las instituciones de la Unión y para los Estados miembros de los acuerdos celebrados de conformidad con el

---

<sup>25</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de marzo de 2011, asunto C-240/09, Lesoochránárske zoskupenie VLK c. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, § 23.

procedimiento previsto en el artículo 218 TFUE (ex artículo 300 TCE) y que, como el Convenio de Aarhus, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico de la Unión a partir de su aprobación mediante la Decisión 2005/370/CE<sup>26</sup>. Considerando la celebración de dicho tratado sobre la base de una competencia compartida entre la Unión y sus Estados miembros, el Tribunal de Justicia se declara competente en sede prejudicial para establecer la línea divisoria entre las obligaciones asumidas por la Unión y aquellas que siguen incumbiendo únicamente a los Estados miembros, e interpretar en consecuencia las disposiciones del Convenio de Aarhus<sup>27</sup>.

En este contexto resulta relevante la Declaración que figura en el anexo de la Decisión 2005/370/CE, en la cual se hace constar que

... los instrumentos legales [comunitarios] vigentes no abarcan totalmente la puesta en práctica de las obligaciones derivadas del artículo 9, apartado 3, del Convenio, por cuanto se refieren a los procedimientos administrativos y judiciales para impugnar acciones u omisiones de personas privadas y de autoridades públicas distintas de las instituciones de la Comunidad Europea a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra d), del Convenio; por lo tanto, los Estados miembros son responsables de poner en práctica dichas obligaciones para la fecha en que la Comunidad Europea apruebe el Convenio, y seguirán siéndolo a menos o hasta que la Comunidad, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Tratado CE, adopte disposiciones de Derecho comunitario que engloben la puesta en práctica de dichas obligaciones.

Con posterioridad se adoptó el Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente<sup>28</sup>.

En este contexto, el Tribunal adopta la posición según la cual ni los términos literales de la Declaración anexada a la Decisión 2005/370/CE precitada, ni la limitación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 2367/2006 a las instituciones y organismos comunitarios, impiden *a priori* la aplicación del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus en relación con los procedimientos administrativos o judiciales nacionales como parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario. La Gran Sala

---

<sup>26</sup> Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DOUE, L 124, de 17 de mayo de 2005, p. 1-3).

<sup>27</sup> Sentencia, § 31.

<sup>28</sup> DOUE, L 264, de 25 de septiembre de 2006, p. 13-19.

fundamenta esta posición sobre la base de la competencia externa explícita de la Unión Europea en el ámbito de la política de medio ambiente<sup>29</sup>, así como la línea jurisprudencial adoptada en su sentencia de 7 de octubre de 2004, asunto C-239/03, Comisión c. Francia<sup>30</sup>, en virtud de la cual

... una cuestión concreta que aún no ha sido regulada por una normativa de la Unión incumbe al Derecho de la Unión cuando tal cuestión se regula en acuerdos celebrados por la Unión y por sus Estados miembros y se refiere a un ámbito ampliamente cubierto por ese Derecho<sup>31</sup>.

El hecho de que la parte actora en el litigio principal reclame ser ‘parte’ en un procedimiento administrativo nacional relativo a la concesión de excepciones al régimen de protección de especies protegidas que, como el oso pardo, se encuentran enumeradas en el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres<sup>32</sup>, implica pues la aplicación del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus a una situación que se rige tanto por el Derecho nacional, como por el Derecho de la Unión. En consecuencia, considera el Tribunal que “... existe un interés comunitario manifiesto en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, dicha disposición reciba una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que tenga que aplicarse”<sup>33</sup>.

Basándose en esta apreciación, procede a analizar si el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus tiene o no efecto directo: a este respecto la Gran Sala constata que dicha disposición no establece una obligación clara y precisa que determine directamente la situación jurídica de los particulares, sino que subordina la legitimación activa de los miembros del público a los eventuales criterios previstos por el Derecho interno. Así pues, la disposición en cuestión carece de efecto directo, cuyo desarrollo normativo y configuración corresponde al Derecho interno de cada Estado miembro.

No obstante, tratándose de la regulación procesal por cada Estado miembro de una acción destinada a garantizar la tutela de derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión reconoce a los particulares en virtud del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus,

---

<sup>29</sup> Arts. 191.4 y 192 TFUE (ex arts. 174.2 y 175 TCE).

<sup>30</sup> Recueil 2004, p. I-9325, §§ 29-31.

<sup>31</sup> Sentencia, § 36.

<sup>32</sup> DOCE, L 206, de 22 de julio de 1992, p. 7-50.

<sup>33</sup> Sentencia, § 40.



los Estados deben articular recursos efectivos y equivalentes a los de Derecho interno en su aplicación<sup>34</sup>. En los términos utilizados por el Tribunal en esta sentencia,

De ello resulta que, cuando se trata de una especie protegida por el Derecho de la Unión y en particular por la Directiva sobre los “hábitats”, corresponde al juez nacional, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho medioambiental de la Unión, interpretar su Derecho nacional de manera conforme, en la medida de lo posible, a los objetivos del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus<sup>35</sup>.

Mediante su *sentencia de 12 de mayo de 2011, asunto C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV c. Bezirksregierung Arnsberg*, el Tribunal de Justicia resuelve una petición de decisión prejudicial del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania) relativa a la interpretación de la Directiva 85/337/CEE, planteada en el marco de un litigio entre la asociación de Renania del Norte-Westfalia del Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland y la Bezirksregierung Arnsberg, en relación con una autorización concedida a Trianel Kohlekraftwerk GmbH, para la construcción y explotación de una central térmica en las inmediaciones de cinco áreas designadas zonas protegidas por la normativa nacional.

En su resolución de remisión, el Oberverwaltungsgericht explicitaba su apreciación según la cual la autorización concedida a Trianel era contraria al artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en la medida en que la evaluación del impacto ambiental del proyecto no demostraba que éste careciera de incidencia significativa sobre las zonas especiales de conservación cercanas. Por otro lado, el tribunal de remisión también explicaba que la legitimación activa de las organizaciones no gubernamentales en el régimen general de recursos de anulación previsto en la Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) está condicionada a la vulneración de los derechos del recurrente, es decir, sus derechos subjetivos públicos. Sin embargo, el Derecho interno aplicable en materia de protección contra la contaminación y de protección del agua y de la naturaleza no tendría por objeto la protección de tales derechos, ni resultaban aplicables ninguna de las excepciones

---

<sup>34</sup> *Ibíd.*, §§ 47 y 48.

<sup>35</sup> *Ibíd.*, § 50.

contempladas en la legislación alemana que eximían a las asociaciones de protección del medio ambiente de ese requisito de admisibilidad de los recursos. Ante estas circunstancias, el *Oberverwaltungsgericht* planteó una serie de cuestiones prejudiciales.

Por medio de las dos primeras cuestiones remitidas, que el Tribunal de Justicia examinó de forma conjunta, el tribunal remitente solicitaba que se dilucidase si el artículo 10 *bis* de la Directiva 85/337 admite una normativa interna que no reconoce a las ‘organizaciones no gubernamentales que actúan en favor de la protección del medio ambiente’ (artículo 1.2 Directiva 85/337) la posibilidad de invocar en juicio disposiciones que protegen intereses colectivos, en el marco de un recurso contra una decisión de autorización de proyectos que puedan tener ‘repercusiones importantes sobre el medio ambiente’ (artículo 1.1 Directiva 85/337). Asimismo, en caso de respuesta afirmativa, deseaba saber si el artículo 10 *bis* de la Directiva se oponía de manera general a dicha normativa, o sólo en la medida en que impide a las asociaciones ambientalistas invocar determinadas disposiciones –nacionales o comunitarias– de Derecho ambiental.

El Tribunal de Justicia basa su contestación en una interpretación literal y teleológica de las disposiciones del artículo 10 *bis* de la Directiva 85/337. A tenor del párrafo primero de dicho precepto, los miembros del público interesado deben poder presentar un recurso ante un tribunal de justicia u otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, la legalidad de decisiones, acciones u omisiones recogidas en dicho artículo, a condición de tener un ‘interés suficiente’ o, alternativamente, invocar el ‘menoscabo de un derecho’. Asimismo, en la aplicación de dicha disposición los Estados deben perseguir el objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia. En particular, el párrafo tercero del artículo 10 *bis* establece que “... [s]e considerará que toda organización no gubernamental [que actúa a favor de la protección del medio ambiente] tiene siempre interés suficiente... o acredita el menoscabo de un derecho...”. Así pues, correspondiendo al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro la designación de los órganos jurisdiccionales competentes y la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la protección de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, el Tribunal de Justicia considera no obstante que los principios de equivalencia y de efectividad exigen que la regulación procesal de los mismo no debe ser menos favorable que la referente a recursos

semejantes de Derecho interno, ni hacer en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión<sup>36</sup>.

Sobre la base de esta interpretación, el Tribunal considera que el legislador alemán puede condicionar la legitimación activa de los particulares en el marco de un recurso jurisdiccional contra las decisiones, actos u omisiones contemplados en el artículo 10 *bis* de la Directiva 85/337 a la vulneración de sus derechos públicos subjetivos. Sin embargo, la aplicación de este requisito a las organizaciones no gubernamentales ambientalistas sería incompatible con la Directiva 85/337. En particular, la imposición de las mismas condiciones para el ejercicio de la legitimación activa a los particulares en defensa de sus intereses privados y a las asociaciones u organizaciones cuyo fin es la protección de intereses colectivos es contrario al principio de efectividad y al objetivo de asegurar un amplio acceso a la justicia al ‘público interesado’ en el sentido del artículo 1.2 de la Directiva 85/337. Por consiguiente, el Tribunal concluye por afirmar que

... el artículo 10 bis, párrafo tercero, última frase, de la Directiva 85/337, debe interpretarse en el sentido de que, entre los “derechos susceptibles de sufrir un menoscabo”, derechos cuya titularidad se reconoce a las asociaciones de defensa del medio ambiente, deben figurar necesariamente las normas de Derecho nacional que aplican la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, así como las normas de Derecho de la Unión de medio ambiente de efecto directo<sup>37</sup>.

Por último, para el caso en que el Oberverwaltungsgericht no pudiese interpretar la VwGO alemana de conformidad con las exigencias del artículo 10 *bis* de la Directiva 85/337, su tercera cuestión prejudicial iba dirigida a averiguar si una asociación ambientalista puede fundar un recurso contra una autorización de proyectos que puedan tener importantes repercusiones sobre el medio ambiente en el sentido del artículo 1.1 de dicha Directiva, pese a que el Derecho procesal interno no lo permita.

El Tribunal de Justicia responde a esta cuestión declarando el efecto directo de la disposición contenida en la última frase del párrafo tercero del artículo 10 *bis* de la Directiva 85/337 en la medida en que, desde el punto de vista de su contenido, no está sujeta a condición y es suficientemente precisa<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Sentencia, § 43.

<sup>37</sup> *Ibíd.*, § 48.

<sup>38</sup> *Ibíd.*, §§ 53-59.

### C. Evaluación del impacto ambiental

En su *sentencia de 17 de marzo de 2011, asunto C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest et al. c. Vlaams Gewest*, coadyuvada por The Brussels Airport Company NV, el Tribunal de Justicia resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Consejo de Estado belga sobre la interpretación del punto 7, letra a) del anexo I de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en relación con una resolución de la Vlaams Gewest (Región flamenca) sobre la explotación del aeropuerto de Bruselas-Nacional.

Dicho aeropuerto está situado en territorio de la Región flamenca y dispone de varias pistas de más de 2100 metros de longitud. Su explotación está sujeta a la concesión de una autorización medioambiental desde el año 1999. En el año 2000, la operadora del aeropuerto obtuvo la primera autorización medioambiental por una duración de cinco años, que fue modificada en varias ocasiones dentro de dicho plazo para reducir los niveles de contaminación acústica. La tramitación de los procedimientos correspondientes no implicó en ningún momento la realización de una evaluación de impacto ambiental. En 2004, la compañía operadora del aeropuerto solicitó la prórroga de la autorización medioambiental, así como una autorización para la ampliación del mismo. La solicitud de ampliación fue desestimada por la Diputación Permanente del Consejo Provincial del Brabante flamenco. Por su parte, la autorización medioambiental para su explotación fue prorrogada, sin que se estimase necesaria una evaluación de impacto ambiental.

Esta última decisión fue objeto de recurso administrativo sobre la base del carácter preceptivo de la evaluación del impacto ambiental. No obstante, el Ministro flamenco de Obras públicas, Energía, Medio ambiente y Naturaleza confirmó la decisión de la Diputación Permanente. En particular, el Ministro basó su decisión tanto en la normativa flamenca, como en el artículo 4.1 de la Directiva 85/337/CEE, en relación con el punto 7, a) de su anexo I. Dicha disposición hace referencia a la “[c]onstrucción... de aeropuertos cuya pista básica de aterrizaje sea de al menos 2100 metros de longitud” como proyecto cuya autorización requiere previa evaluación del impacto ambiental. A continuación, las partes actoras en el litigio principal interpusieron recurso contencioso-administrativo ante el Consejo de Estado contra la decisión del Ministro. Dicho órgano jurisdiccional planteó un seguido de cuestiones

prejudiciales que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordó de forma conjunta. Las cuestiones planteadas eran las siguientes:

- 1) Cuando se requieren distintas autorizaciones, por un lado, para obras de infraestructura en un aeropuerto con una pista de despegue y aterrizaje de al menos 2100 metros de longitud y, por otro lado, para la explotación de ese aeropuerto, y esta última autorización –la autorización medioambiental– sólo se concede por un período determinado, ¿debe entenderse el término “construcción”, utilizado en el punto 7, letra a), del anexo I de la [Directiva 85/337] en el sentido de que no sólo debe procederse a una evaluación de impacto ambiental para la realización de las obras de infraestructura, sino también para la explotación del aeropuerto?
- 2) ¿Esta evaluación obligatoria del impacto ambiental se aplica también a la renovación de la autorización medioambiental del aeropuerto, tanto en el caso de que dicha renovación no implique modificación o ampliación alguna de la explotación como en el caso de que se prevea tal modificación o ampliación?
- 3) A efectos de la obligación de proceder a una evaluación de impacto ambiental en caso de renovación de una autorización medioambiental para un aeropuerto, ¿es diferente la situación si, con motivo de una autorización de explotación anterior, ya se había realizado una evaluación de impacto ambiental, o si el aeropuerto ya estaba en explotación en el momento en que el legislador comunitario o nacional introdujo la evaluación de impacto ambiental?<sup>39</sup>

En su sentencia, el Tribunal de Justicia parte de una interpretación estricta del término ‘proyecto’, en el sentido del artículo 1.2 de la Directiva 85/337, que delimita su ámbito de aplicación *ratione materiae*. A este respecto, el Tribunal considera que el término ‘proyecto’ utilizado en el artículo 1.2 de la Directiva, puesto en relación con el término ‘construcción’ empleado en el punto 7, a) de su anexo I, implica necesariamente la realización de obras o intervenciones que modifiquen la realidad física del emplazamiento, razón por la cual la renovación de una autorización de explotación de un aeropuerto *per se* no podría ser calificada como tal<sup>40</sup>.

Ello no obstante, haciéndose eco de las alegaciones presentadas por las partes actoras en el litigio principal en el sentido de que desde la expiración del plazo de transposición de la Directiva 85/337 se habrían realizado obras de modificación de la infraestructura del aeropuerto en sucesivas etapas, sin que se hubiese efectuado una evaluación de impacto ambiental, el Tribunal de Justicia reafirma su jurisprudencia según la cual el objetivo de la normativa de la unión no puede eludirse mediante un fraccionamiento de los proyectos y sin que se tenga en cuenta su efecto acumulativo<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Sentencia, § 18.

<sup>40</sup> *Ibíd.*, § 24.

<sup>41</sup> *Ibíd.*, § 36.

En consecuencia, con el fin de asegurar el efecto útil de la Directiva, el Tribunal de Justicia declara que corresponde al órgano jurisdiccional de remisión determinar si, habida cuenta del efecto acumulativo de las distintas obras realizadas, la prórroga de la autorización de explotación no se inserta en un procedimiento de autorización con varias etapas, que en su conjunto constituyan un ‘proyecto’ que requiera de evaluación de impacto ambiental<sup>42</sup>.

D. Seguridad de la biotecnología: indemnización de los operadores en el sector agroalimentario cuyos cultivos resultan ‘contaminados’ por polen genéticamente modificado

Concluimos este apartado de la crónica haciendo mención de las *conclusiones del Abogado General Yves BOT relativas a la petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof en el asunto C-442/09, Karl Heinz Bablok et al. contra Freistaat Bayern*, que fueron presentadas el 9 de febrero de 2011. En ellas se proponen al Tribunal de Justicia criterios para la interpretación del Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente<sup>43</sup>. En particular, se pretende dilucidar el régimen jurídico de alimentos que —como la miel— son elaborados con polen, y en los que se detecta la presencia no intencionada de polen procedente de plantas modificadas genéticamente, cuya presencia en alimentos y/o piensos sólo ha sido autorizada por la Comisión en casos específicos bajo el régimen del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

La trascendencia de esta cuestión radica en que —como señala el propio Abogado General— de la respuesta que se de a esta cuestión dependerá “... que se reconozca, en el litigio principal, un derecho de indemnización pecuniaria a apicultores que explotan colmenas en las inmediaciones de terrenos propiedad del Freistaat Bayern, en los que durante los últimos años se ha cultivado maíz modificado genéticamente MON 810 con fines de investigación”.<sup>44</sup> Sin embargo, más allá del asunto de autos, la interpretación que finalmente acoja el Tribunal de Justicia en el presente caso marcará, sin duda, un destacado precedente jurisprudencial sobre la indemnización de los operadores económicos en el sector agroalimentario cuyos cultivos resulten

---

<sup>42</sup> *Ibíd.*, § 38.

<sup>43</sup> DOUE, L 268, de 18 de octubre de 2003, p. 1-23.

<sup>44</sup> Conclusiones, § 4.

‘contaminados’ por material genético procedente de plantas modificadas genéticamente cultivadas en las inmediaciones de sus instalaciones.

A estos efectos, la principal cuestión jurídica que aborda el Abogado General es la posible calificación de los productos de los operadores económicos afectados por la contaminación transgénica como ‘alimento modificado genéticamente’, que quedaría sujeto al régimen de autorización de comercialización, supervisión y etiquetado del Reglamento n° 1829/2003<sup>45</sup>.

#### D.1. Litigio principal ante la jurisdicción alemana

De conformidad con la Directiva 90/220/CEE, la Comisión Europea autorizó por medio de la Decisión 98/294/CE, de 22 de abril de 1998<sup>46</sup>, la comercialización de maíz genéticamente modificado de la línea MON 810 de la empresa Monsanto. Este tipo de maíz ha sido modificado mediante la inclusión de un gen propio de un tipo de bacteria, el *Bacillus thuringiensis* (Bt), que le permite sintetizar una toxina que actúa contra las orugas del barrenador del maíz —un tipo de mariposa dañina para la planta de maíz— destruyendo sus células intestinales.

Determinados productos derivados de dicha línea de maíz —la harina, el gluten, la sémola, el almidón, la glucosa y el aceite de maíz derivado de la misma— también fueron objeto de autorización bajo el Reglamento (CE) n° 258/97, e integrados ulteriormente en el régimen del Reglamento 1829/2003. Desde su expiración en 2007, Monsanto solicitó una renovación de dichas autorizaciones, que de conformidad con el artículo 11.4 del Reglamento 1829/2003 quedaban automáticamente prorrogadas hasta la adopción de la correspondiente decisión por la Comisión Europea. Esta solicitud todavía se encuentra en fase de estudio.

Al igual que habían hecho las autoridades competentes en otros cinco Estados miembros de la Unión Europea, la Oficina federal alemana de protección de los consumidores y de seguridad alimentaria prohibió en 2009 el cultivo de maíz de la línea MON 810 y acordó la suspensión temporal de la autorización de comercialización<sup>47</sup>. Hasta la adopción de dicha medida, el Estado de Baviera había

---

<sup>45</sup> *Ibíd.*, § 5.

<sup>46</sup> DOCE, L 131, de 5 de mayo de 1998, p. 32-33.

<sup>47</sup> Esta decisión se basaba en una evaluación científica de los datos obtenidos en el marco del seguimiento del cultivo del maíz MON 810, que indicaba la presencia de importantes efectos ambientales no tenidos en cuenta en el momento de su autorización. En particular, la medida se fundamenta en los datos sobre la persistencia de la toxina Bt en el suelo de los terrenos cultivados con

autorizado el cultivo de maíz MON 810 con fines de investigación en terrenos de su propiedad. En 2005, el polen de maíz recolectado por el Sr. Bablok —apicultor no profesional y actor en el litigio principal— en sus colmenas situadas a unos 500 metros de una de las fincas agrícolas experimentales del Estado de Baviera contenía ADN MON 810, así como la toxina Bt. Asimismo, la miel producida en dichas colmenas también contenía pequeñas cantidades de dicho ADN, como consecuencia de la incorporación al mismo de ese polen.

Bajo la iniciativa del Sr. Bablok, varios apicultores no profesionales, cuyas colmenas se encuentran en las inmediaciones de dichos terrenos, demandaron al Estado de Baviera en su calidad de propietarios de las fincas agrícolas experimentales, alegando que las actividades allí desarrolladas habían causado una ‘modificación sustancial’ de sus productos de apicultura en el sentido del artículo 36a de la Ley Federal de Regulación de la Tecnología Genética de 20 de junio de 1990 (Gesetz zur Regelung der Gentechnik, BGBl. 16.12.1993, I S. 2066) y del § 906.2 BGB, que impedía su comercialización y consumo. Como consecuencia de ello, se les producía un daño patrimonial cuya indemnización reclamaban.

Mediante sentencia de 30 de mayo de 2008, el Bayerisches Verwaltungsgericht de Augsburgo estimó la demanda en primera instancia, al considerar que la incorporación del polen de maíz MON 810 a los productos de apicultura de las partes demandantes implicaba una modificación de los mismos que exigía que su comercialización como alimentos quedase sujeta a autorización de conformidad con el artículo 4.2 del Reglamento nº 1829/2003. Dicha sentencia fue objeto de apelación ante el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof por las actoras, por el Estado de Baviera y por Monsanto (Monsanto Technology LLC y Monsanto Agrar Deutschland GmbH).

Ante la complejidad de los hechos objeto de calificación jurídica, el tribunal de remisión suspendió el procedimiento y planteó un seguido de cuestiones prejudiciales acerca de la interpretación de algunas disposiciones del Reglamento nº 1829/2003. En particular, y por lo esencial, el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof solicita que el

---

dicha línea de maíz (más de 200 días), su solubilidad en el agua de riego y, por consiguiente, su amplia dispersión en los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, también se disponían de datos toxicológicos que ponían de manifiesto que la toxina Bt no afectaba específicamente a la oruga del barrenador del maíz, sino que afectaba indistintamente a un número significativamente mayor de coleópteros, lepidópteros y otras larvas de insectos terrestres y acuáticos, algunas de las cuales constituían especies protegidas o en peligro de extinción. Ver a este respecto la notificación de la resolución a la empresa Monsanto, en *Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Abteilung Gentechnik, Akt.-Z. 6788-02-13 (C/F/95/12-02), 17. April 2009*.



Tribunal de Justicia determine si el polen de la línea de maíz MON 810 que se encuentra en la miel o es utilizado como complemento alimenticio está incluido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento —sea como organismo genéticamente modificado o como alimento genéticamente modificado— así como las consecuencias jurídicas de su calificación jurídica de conformidad con la normativa comunitaria<sup>48</sup>.

#### D.2. Análisis del Abogado General

La primera cuestión planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof está dirigida a dilucidar si el polen de una planta genéticamente modificada que queda incorporado en la miel o es utilizado como complemento alimenticio y que, por consiguiente, deja de poder cumplir su función en el proceso reproductivo de las plantas, puede ser calificado de ‘organismo’ en el sentido del artículo 2.1 de la Directiva 2001/18 y del artículo 2.4 del Reglamento (CE) nº 1829/2003<sup>49</sup>.

A este respecto, el Abogado General Bot se inclina por recomendar al Tribunal de Justicia una respuesta negativa. Al fundamentar esta conclusión, el Abogado General se basa en la circunstancia de la pérdida de capacidad de reproducirse o de transferir material genético del polen incorporado a la miel, o que ha sido objeto de un proceso de desecación para su utilización como complemento alimenticio. De esta manera, ese polen no encajaría en la definición del término ‘organismo’ que ofrece el artículo 2.1 de la Directiva<sup>50</sup> —al cual remite el artículo 2.4 del Reglamento— interpretada en sus propios términos literales, y a la luz también del artículo 3, h) del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que define el concepto de ‘organismo vivo’<sup>51</sup>. Considera el Abogado General que la mera presencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) de la línea de maíz MON 810 en la miel y en el polen muerto —circunstancia que posibilita en principio su transferencia horizontal, esto es, su absorción por microorganismos tales como las bacterias— no permite su calificación de ‘organismo’, en la medida en que el criterio determinante para esa calificación reside en la *capacidad* de reproducirse o de transferir *activamente* el

---

<sup>48</sup> *Ibíd.*, § 63.

<sup>49</sup> *Ibíd.*, § 64.

<sup>50</sup> En los términos de dicha disposición, debe entenderse por ‘organismo’, a los efectos de la Directiva 2001/18/CE, “... toda entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material genético”.

<sup>51</sup> En los términos de dicha disposición, debe entenderse por ‘organismo vivo’ a los fines del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología “... cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides”.

material genético<sup>52</sup>. Así pues, la pérdida de dicha capacidad impide su calificación de organismo y, en su caso, de organismo genéticamente modificado, aunque contenga material genético de este tipo de organismo. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente "... comprobar, sobre la base de estudios científicos que eventualmente pueda considerar, que el polen utilizado en las condiciones antes mencionadas ya no es una entidad biológica viva"<sup>53</sup>.

Mediante su segunda cuestión, el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof solicita orientación del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de los artículos 2.10 y 3.1, c) del Reglamento (CE) nº 1829/2003. En primer lugar, desea saber si resulta suficiente para que un alimento pueda ser calificado como 'producido a partir de OMG', que "... contenga material procedente de plantas modificadas genéticamente que, en un momento anterior, ha tenido una capacidad reproductiva concreta e individual"<sup>54</sup>. En caso de respuesta afirmativa, el tribunal de remisión desea saber en segundo lugar si la intencionalidad de la inclusión de dicho material genético es un criterio determinante para la calificación del alimento como 'producido a partir de OMG' en el sentido del artículo 2.10, en relación con el artículo 3.1, c) del Reglamento.

A este respecto, el Abogado General propone una interpretación de dichas disposiciones en el sentido de considerar los alimentos en cuestión como alimentos modificados genéticamente, en la medida en que se trataría de alimentos 'producidos a partir de OMG', siendo absolutamente irrelevante el grado de intencionalidad presente en la inclusión del material genético de OMG en los mismos.

Para ello, el Abogado General se basa tanto en la definición de 'ingrediente' contenida en el artículo 6.4 de la Directiva 2000/13/CE, como en el anexo II de la Directiva 2001/110<sup>55</sup>, relativo a las características de composición de la miel, disposición ésta última de la cual puede deducirse que "...el polen constituye materia orgánica inherente a la composición de la miel. No es un cuerpo extraño, una impureza de la miel, sino un componente normal de ésta que no puede, en principio,

---

<sup>52</sup> Ver en particular Conclusiones, §§ 84-92.

<sup>53</sup> *Ibíd.*, § 91.

<sup>54</sup> *Ibíd.*, § 93.

<sup>55</sup> Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel (DOUE, L 10, de 12 de enero de 2002, p. 47-52).

ser retirado”<sup>56</sup>. En este sentido, afirma que el procedimiento de recolección de la miel de mediante centrifugación de los paneles constituye una intervención humana que propicia la mezcla del polen acumulado en los mismos con la miel, de manera que ese polen puede ser considerado a su vez como ‘ingrediente’ en los términos del artículo 6.4 de la Directiva 2000/13, al tratarse de una sustancia utilizada en la fabricación o en la preparación de la miel, y que todavía se encuentra presente en el producto acabado. De todo ello se derivaría, en opinión del Abogado General, que la simple presencia de polen del maíz MON 810 en la miel implicaría en definitiva la presencia de un ingrediente ‘producido a partir de OMG’ en el sentido del artículo 3.1, c) del Reglamento 1829/2003 y, por consiguiente, su inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento y, en particular, en el régimen de autorización y supervisión de los alimentos modificados genéticamente en él establecido<sup>57</sup>.

Según el Abogado General, esa presencia de material genético derivado de un OMG como criterio determinante para la inclusión de la miel en el ámbito de aplicación del Reglamento es un criterio objetivo, que no depende de la intencionalidad de su inclusión en el alimento. En los términos utilizados en sus conclusiones, “... [t]al criterio subjetivo sería contrario al objetivo de protección de la salud humana que persigue dicho Reglamento, en la medida en que el riesgo de un alimento modificado genéticamente puede entrañar para la salud humana es independiente de que la sustancia en cuestión sea introducida de manera consciente o no”<sup>58</sup>.

Por último, la tercera cuestión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof va dirigida a averiguar si sería admisible una interpretación restrictiva de los artículos 3.1 y 4.2 del Reglamento, en el sentido que la miel, aún reuniendo los criterios para ser considerada alimento genéticamente modificado, no fuese sometida al régimen de autorización y supervisión de dicho Reglamento, cuando la cantidad del material derivado de una planta genéticamente modificada que contiene sea ínfima, justo por encima del umbral de detección. En particular, el tribunal de remisión pregunta si cabría aplicar analógicamente los umbrales de tolerancia que el mismo Reglamento establece respecto de la obligación de etiquetado (artículo 12.2 Reglamento) y de las medidas transitorias en caso de presencia

---

<sup>56</sup> Conclusions, § 108.

<sup>57</sup> Ver en particular Conclusiones, §§ 98-112.

<sup>58</sup> *Ibíd.*, § 115.

accidental o técnicamente inevitable de material modificado genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido favorable (artículo 47.1)<sup>59</sup>.

El Abogado General propone una respuesta negativa a esta tercera cuestión. Para ello parte de la constatación de que, a diferencia de otros casos, en los que la Comisión ha autorizado sin restricciones concretas la comercialización de alimentos derivados de una determinada planta genéticamente modificada, en el presente caso sólo había autorizado la comercialización de un *numerus clausus* de productos derivados de la línea MON 810, a saber, la harina, el gluten, la sémola, el almidón, la glucosa y el aceite de maíz. En este sentido, adoptando una posición contraria a las alegaciones de la propia Monsanto y del Gobierno polaco, el Abogado General opina que la autorización concedida en virtud de la Directiva 2001/18/CE o de la normativa anterior, la Directiva 90/220/CE no podría cubrir todas las consecuencias de la liberación o comercialización de OMG sin poner en cuestión el objeto del Reglamento (CE) nº 1829/2003. Por el contrario, ambos actos legislativos comunitarios deberían ser entendidos como complementarios, de suerte que “... la autorización concedida al amparo de esa Directiva no prejuzga la ‘evaluación de la seguridad’ de los alimentos modificados genéticamente que debe efectuarse de conformidad con el... Reglamento...”<sup>60</sup>. Habida cuenta de ello, considera que la autorización de la comercialización de un número limitado de productos de alimentación derivados de la línea MON 810 no puede ser asimilada a una autorización general, razón por la cual — no figurando en dicha lista— la miel que contiene polen de maíz de dicha línea habría de obtener una autorización de comercialización bajo el régimen del Reglamento (CE) nº 1829/2003. Este escollo tampoco sería susceptible de ser contornado por vía interpretativa, mediante una aplicación analógica de las excepciones contempladas en dos disposiciones específicas del Reglamento —los artículos 12.2 y 47.1— respecto de supuestos especiales, que no admiten una interpretación extensiva sin desvirtuar el régimen establecido en dicho acto legislativo<sup>61</sup>. Así pues, concluye el Abogado General por afirmar que

... corresponde a las autoridades nacionales, en virtud del principio de subsidiariedad, establecer las reglas y procedimientos idóneos para paliar los inconvenientes que pudieran surgir de la coexistencia de los cultivos modificados

---

<sup>59</sup> *Ibíd.*, §§ 127 y 131.

<sup>60</sup> *Ibíd.*, § 140.

<sup>61</sup> *Ibíd.*, §§ 150-152.

genéticamente y de las plantaciones tradicionales cuando la solución de tales inconvenientes no se desprenda directamente del Derecho de la Unión. *La indemnización del perjuicio económico sufrido por el apicultor que no puede comercializar sus productos constituye una de esas soluciones*<sup>62</sup>.

### 3.2. Cuestiones prejudiciales de validez

Concluimos esta crónica haciendo mención a la *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2010, asunto C-77/09, Gowan Comércio Internacional e Serviços, Lda. c. Ministero della Salute*. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal administrativo regionale del Lazio (Italia) en el marco de un recurso interpuesto por la sociedad portuguesa Gowan para obtener la anulación de la autorización provisional de comercialización de un número limitado de productos fitosanitarios que contuvieran fenarimol, acordada por Ministerio italiano de la salud en aplicación de la Directiva 2006/134/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa fenarimol<sup>63</sup>.

La parte actora en el litigio principal funda su recurso en la ilegalidad de la Directiva 2006/134, alegando que las restricciones que impone al uso de dicha sustancia como fungicida en la agricultura se basan en un error manifiesto de apreciación de los estudios científicos en la evaluación de los riesgos. Por otro lado, alega que violan el principio de seguridad jurídica, así como los principios de cautela y de proporcionalidad.

A la luz de dichas alegaciones y, en la medida en que el procedimiento previo de evaluación científica de los riesgos había resultado ser positivo, que la propuesta inicial de la Comisión contemplaba la inclusión del fenarimol en el anexo I de la Directiva 91/414 sin ningún tipo de restricciones, y que éstas fueron incorporadas a la Directiva 2006/134 en el marco del procedimiento de comitología, el órgano jurisdiccional de remisión elevó la siguiente cuestión prejudicial:

¿Es conforme a Derecho la Directiva 2006/134/CE, que ha limitado significativamente el uso del fenarimol, habida cuenta del resultado de la

---

<sup>62</sup> *Ibíd.*, § 153 (énfasis propio).

<sup>63</sup> DOUE, L 349, de 12 de diciembre de 2006, p. 32-36.

evaluación técnico-científica realizada por el Estado ponente, que parece llegar a la conclusión de que el riesgo derivado de dicho uso es aceptable?<sup>64</sup>

Basándose en un análisis pormenorizado de los trabajos previos realizados por la Comisión Europea, en colaboración con el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, que condujeron a la adopción de dicha Directiva<sup>65</sup>, el Tribunal de Justicia rechaza todas y cada una de las alegaciones realizadas por la parte actora en el litigio principal.

Por un lado, considera que los criterios seguidos en la evaluación de los riesgos derivados de la utilización de la sustancia fenarimol para el sistema endocrino y para la salud humana, que justificaron la adopción por la Comisión de las medidas contenidas en la Directiva 2006/134, quedan plenamente cubiertos por el artículo 5.1, b) de la Directiva 91/414/CEE. Así pues, la actuación de la Comisión queda en definitiva amparada por una normativa clara y precisa, sobre la base de la cual los justiciables pueden conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar en consecuencia las medidas que estimen oportunas<sup>66</sup>.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia rechaza que las medidas adoptadas a través de la Directiva 2006/134 se basen en un manifiesto error de apreciación de los estudios científicos realizados para la evaluación de los riesgos de la utilización del fenarimol. A este respecto, el Tribunal se atiene a que la evaluación técnico-científica realizada por el Estado ponente en el procedimiento para la inclusión de una nueva sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414 —que en el presente caso resultó ser positiva— no es vinculante para la Comisión ni para el Consejo. Además de ello, también valoró los sucesivos informes complementarios realizados como consecuencia de la sensibilidad demostrada por la Comisión Europea con las reticencias persistentes mostradas por los representantes de varios Estados miembros en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. Sobre esta base, el Tribunal concluye que la Comisión había examinado detenidamente y con imparcialidad los datos científicos aportados en la fase de evaluación de los riesgos del uso del fenarimol para su inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Sentencia, § 22.

<sup>65</sup> *Ibíd.*, §§ 30-44.

<sup>66</sup> *Ibíd.*, §§ 47 y 51.

<sup>67</sup> *Ibíd.*, § 66.

En último lugar, el Tribunal analiza si las restricciones impuestas a la utilización de dicha sustancia exceden de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por la Directiva 91/414 a la luz de los principios de cautela y de proporcionalidad.

Como recuerda el Tribunal, en virtud del principio de cautela, que es de aplicación cuando las instituciones de la Unión adoptan medidas de protección de la salud humana en materia de política agrícola común, pueden adoptarse medidas de protección cuando subsisten dudas sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud de las personas, sin necesidad de esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de los mismos<sup>68</sup>. A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que las reticencias y preocupaciones expresadas por los representantes de varios Estados miembros en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal no podían ser desestimadas como simples consideraciones de naturaleza hipotética, en la medida en que dichas reticencias también se basaban en estudios e informes de carácter científico que ponen de manifiesto importantes incertidumbres sobre el impacto de del fenarimol en el sistema endocrino<sup>69</sup>. De esta manera, considera el Tribunal que el sometimiento de la autorización de dicha sustancia a determinadas limitaciones en su uso queda plenamente amparado bajo el principio de cautela.

Finalmente, en atención al principio de proporcionalidad, el Tribunal estima que “... sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad [de la Directiva 2006/134]”. Sin embargo, el Tribunal no considera que la limitación temporal de 18 meses de la autorización con restricciones adoptada en la Directiva sea desproporcionada, teniendo en cuenta que la misma puede ser renovada e incluso ampliada, en función de la evolución de los conocimientos científicos sobre los riesgos que entraña su utilización en la agricultura.

---

<sup>68</sup> *Ibíd.*, §§ 71-73.

<sup>69</sup> *Ibíd.*, § 78.





**Sumari:** 1. Consideracions introductòries. 2. Recursos per incompliment (article 258 TFUE / ex article 226 TCE). 2.1 Conservació de la flora i fauna. 2.2. Programes de seguiment de l'estat de les aigües. 2.3. Avaluació de l'impacte ambiental. 3. Qüestions prejudicials (article 267 TFUE / ex article 234 TCE). 3.1. Qüestions prejudicials d'interpretació. A. Accés del públic a la informació mediambiental. B. Participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient. C. Avaluació de l'impacte ambiental. C. Avaluació de l'impacte ambiental. D. Seguretat de la biotecnologia: indemnització dels operadors en el sector agroalimentari els cultius són 'contaminats' per pol·len genèticament modificat. 3.2. Qüestions prejudicials de validesa.

## 1. Consideracions introductòries

En el període comprès entre l'1 de desembre de 2010 i el 30 de maig de 2011, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència en onze assumptes relacionats amb el Dret ambiental. Entre elles cinc van ser dictades en el marc de procediments incoats per la Comissió Europea sobre la base de l'article 258 TFUE en relació amb l'incompliment de diverses directives en matèria de conservació de la flora i fauna, d'establiment i aplicació de programes de seguiment de l'estat de les aigües continentals superficials i d'avaluació d'impacte ambiental de determinats projectes públics i privats.

D'altra banda, el Tribunal ha dictat en el període sis sentències resolent peticions de decisió prejudicial sobre la interpretació i la validesa de de diferents disposicions de dret ambiental de la Unió Europea. En particular, cinc peticions de decisió prejudicial tenien per objecte la interpretació de diferents disposicions en matèria d'accés del públic a la informació mediambiental, de participació del públic en la presa de decisions i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i en matèria d'avaluació d'impacte ambiental. Així mateix, pel seu interès i transcendència, s'inclouen en aquesta crònica les conclusions de l'advocat general Yves BOT relatives a la petició de decisió prejudicial plantejada pel Bayerischer Verwaltungsgerichtshof de Munic en l'assumpte *Bablok et al. c. Freistaat Bayern*. La futura sentència del Tribunal de Justícia relativa a aquest assumpte està cridada a marcar una important fita jurisprudencial quant a la indemnització dels operadors econòmics en el sector agroalimentari, els cultius dels quals resultin 'contaminats' per pol·len de plantes genèticament modificades.

L'única sentència dictada en el marc d'una qüestió prejudicial de validesa confirma l'adequació del fons i de la forma de la Directiva 2006/134/CE de la Comissió, d'11 de desembre de 2006, per la qual es modifica la Directiva 91 / 414/CEE del Consell

per tal d'incloure-hi la substància activa fenarimol<sup>1</sup> als principis generals del Dret de la Unió Europea.

## **2. Recursos per incompliment (article 258 TFUE/ex article 226 TCE)**

### *2.1. Conservació de la flora y fauna*

En el període comprès en aquesta crònica, el Tribunal de Justícia ha dictat sentència en el marc de dos recursos presentats per la Comissió Europea contra els Estats membres per l'incompliment de les obligacions que els incumbeixen sota el dret de la Unió Europea en matèria de conservació de la flora i fauna.

En primer lloc, la *sentència del Tribunal de Justícia (Sala quarta) de 11 de novembre de 2010, assumpte C-164/09, Comissió Europea c. República Italiana* declara l'incompliment de l'Estat membre de les obligacions que el incumbeixen en virtut de l'article 9 de la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus salvatges, en la mesura en què considerava provat que la Regió de Venècia havia adoptat i aplicat una reglamentació —la Llei de la Regió de Venècia núm. 13, de 12 d'agost de 2005<sup>2</sup>— que contemplava excepcions a la prohibició de la caça d'aquestes aus, que no eren compatibles amb les condicions fixades a aquest respecte en l'article 9 d'aquesta Directiva. En particular, segons l'apreciació del Tribunal, la llei regional en qüestió contemplava un règim d'excepcions a la prohibició general de la caça respecte de determinades espècies d'aus incloses en l'annex II de la Directiva 79/409 que no es justificava com a mesura excepcional d'aplicació concreta per respondre a exigències precises en situacions específiques com ara les que preveu l'article 9.1 de la Directiva<sup>3</sup>. D'altra banda, el Tribunal va considerar provat que l'aplicació del règim d'excepcions que estableix la llei regional de Venècia permetia un volum de caça de les espècies d'aus silvestres en qüestió que no era compatible amb el criteri de la caça 'selectiva' d'aquestes aus i 'en petites quantitats' que es deriva de l'article 9.1, c) de la Directiva<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> DOUE, L 349, de 12 de desembre de 2006, p. 32-36.

<sup>2</sup> BUR Veneto n° 77, de 16 d'agost de 2005.

<sup>3</sup> Sentència, §§ 23-30.

<sup>4</sup> *Ibíd.*, §§ 35-41.

D'altra banda, la *sentència del Tribunal de Justícia (Sala cinquena) de 9 de desembre de 2010, assumpte C-340/09, Comissió Europea c. Regne d'Espanya*, declara l'incompliment de la Directiva 1999/22/CE del Consell, de 29 de març de 1999, relativa al manteniment d'animals salvatges en parcs zoològics<sup>5</sup> per part de l'Estat membre. En particular, el Tribunal de Justícia estima el recurs de la Comissió Europea en apreciar que la disposició transitòria única de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre, de conservació de la fauna silvestre en els parcs zoològics<sup>6</sup> no és compatible amb les obligacions que l'article 4 de la Directiva imposa als Estats membres. De conformitat amb aquesta última disposició, els Estats membres han d'adoptar les mesures necessàries perquè en un termini de quatre anys després de la seva entrada en vigor, cada parc zoològic disposi d'una autorització vàlida, que asseguri el compliment dels estàndards fixats en la Directiva. Abans de concedir o denegar aquesta autorització, l'autoritat competent ha de realitzar una inspecció preceptiva a les instal·lacions de cada parc zoològic que la demani, per tal de verificar el compliment de les condicions d'autorització. Finalment, també s'estableix que els parcs que no compten amb autorització o no compleixin les condicions que s'hi imposen, hauran de ser tancats per l'autoritat competent.

En transposar aquestes disposicions a l'ordenament jurídic espanyol, la disposició transitòria única de la Llei 31/2003 obligava als parcs zoològics oberts al públic en la data de la seva entrada en vigor a sol·licitar la corresponent autorització en el termini d'un any, transcorregut el qual sense haver-ne presentat la sol·licitud, haurien de tancar les seves instal·lacions. No obstant, una vegada demanada, l'autorització es podia entendre concedida per silenci administratiu, si no es notificava la resolució corresponent en el termini de sis mesos.

En el marc del procediment, la Comissió Europea va estar en condicions de provar que nombrosos parcs zoològics havien obtingut l'autorització per silenci administratiu, sense que l'autoritat competent hagi realitzat la inspecció preceptiva per verificar que les instal·lacions complien els estàndards exigits per la Directiva<sup>7</sup>. En particular, aquests parcs es trobaven en les comunitats autònomes d'Aragó, Astúries, Balears, País Basc, Canàries, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella i Lleó,

---

<sup>5</sup> DOCE, L 94, de 9 d'abril de 1999, p. 24-26.

<sup>6</sup> BOE núm. 258, de 28 d'octubre de 2003.

<sup>7</sup> Sentència, §§ 40 i 41.

Extremadura, Galícia, Múrcia i la Comunitat Valenciana, així com en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

## *2.2. Programes de seguiment de l'estat de les aigües*

En aquest apartat farem breu esment de la sentència del Tribunal de Justícia (Sala primera) de 22 de desembre de 2010, es. C-351/09, Comissió Europea c. República de Malta, en la que resol un recurs d'incompliment basat en l'incompliment de l'Estat membre de les seves obligacions d'elaborar un programa de seguiment de l'estat de les aigües superficials, de les aigües subterrànies i de les zones protegides en els termes de l'article 8 de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües<sup>8</sup>, i d'informar periòdicament sobre això en els termes del seu article 15.2.

L'octubre de 2007, Malta va transmetre un resum sobre l'aplicació del programa de seguiment de les aigües de conformitat amb l'article 15.2 de la Directiva, que en opinió de la Comissió no abordava les aigües superficials, raó per la qual va obrir la fase precontenciosa del procediment per incompliment, dirigint un dictamen motivat. Sense negar el caràcter incomplet del seu informe, Malta es va limitar a respondre anunciant que presentaria la informació restant el març de 2010, juntament amb el primer pla de gestió de la captació d'aigües. Transcorregut el termini atorgat per la Comissió per a esmenar la situació d'incompliment sense que Malta hagués complert amb els requisits establerts en el dictamen motivat, es va obrir la fase contenciosa del procediment.

En la mesura que Malta no va contestar formalment cap de les imputacions fetes per la Comissió en el seu dictamen motivat, el Tribunal de Justícia va rebutjar per extemporànies les al·legacions ulteriorment presentades per aquest Estat membre ja en fase contenciosa. Per tant, basant-se en les qüestions de fet i de dret que estableix el dictamen motivat, el Tribunal de Justícia va estimar l'incompliment de les obligacions que li incumbeixen a Malta en virtut de l'article 8.1 i 2, i de l'article 15.2 de la Directiva 2000 / 60/CE, en considerar provat que aquest Estat membre no havia posat

---

<sup>8</sup> DOCE, L 327, de 22 de desembre de 2000, p. 1-73.

en funcionament un pla de seguiment sobre l'estat de les aigües continentals superficials i, per tant, no havia informat sobre això a la Comissió.

### *2.3. Avaluació del impacte ambiental*

El passat mes de març, el Tribunal de Justícia va dictar dues sentències relatives a l'incompliment per Irlanda i Bèlgica, respectivament, en incomplir la normativa interna de transposició diverses disposicions de la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient<sup>9</sup>.

En la *sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 3 de març de 2011, assumpte C-50/09, Comissió Europea c. Irlanda* es declara que aquest Estat membre incompleix les seves obligacions sota el dret de la Unió Europea en la mesura que no havia adaptat correctament la seva legislació interna a la Directiva 85/337. En primer lloc, el Tribunal va estimar que la legislació irlandesa no transponia correctament l'article 3 de la Directiva, ja que l'article 173 de la Planning and Development Act 2000 (PDA) només obliga a l'autoritat d'ordenació del territori a prendre en consideració —al final del procés d'autorització d'un projecte— les dades prèviament recollides sobre el seu impacte ambiental. Acollint la posició sostinguda per la Comissió Europea, el Tribunal va considerar que això no es correspon amb l'obligació més àmplia de l'article 3 de la Directiva, que no només exigeix una recopilació i descripció dels efectes directes i indirectes del projecte sobre diferents factors, sinó que obliga a l'autoritat mediambiental a realitzar una avaluació substantiva del seu impacte que consideri els factors enunciats en aquesta disposició.

En segon lloc, el Tribunal de Justícia també va declarar l'incompliment de les obligacions derivades de la Directiva 85/337, en la mesura que la legislació irlandesa no assegurava plenament que, en cas de competència concurrent de l'Autoritat de l'ordenació del territori i l'Agència de protecció mediambiental per a la concessió d'autoritzacions per a la realització de projectes industrials, sota la PDA i la Environmental Protection Agency Act 1992 (EPAA), que ambdues autoritats exercissin les seves funcions de conformitat amb les exigències dels articles 2 a 4 de

---

<sup>9</sup> DOCE, L 175, de 5 de juliol de 1985, p. 40-48.

la mateixa. En aquestes circumstàncies específiques la normativa irlandesa no assegura, segons l'apreciació del Tribunal una avaluació integral de l'impacte ambiental, ja que

*... no se puede excluir que la [Agencia de protección medioambiental], como autoridad encargada de pronunciarse sobre la autorización de un proyecto en cuestiones ligadas a la contaminación, se pronuncie sin que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental de conformidad con los artículos 2 a 4 de la Directiva...<sup>10</sup>.*

En tercer i últim lloc, el Tribunal també va estimar que la legislació irlandesa no transposava correctament la Directiva 85/337, en excloure expressament les obres de demolició de l'obligació d'avaluació d'impacte ambiental.

Així mateix, la *sentència del Tribunal de Justícia (Sala tercera) de 24 de març de 2011, assumpte C-435/09, Comissió Europea c. Regne de Bèlgica* declara l'incompliment de les obligacions que incumbeixen a aquest Estat en virtut de la Directiva 85/337 per la falta de transposició correcta o completa d'algunes de les seves disposicions en la legislació de la Regió flamenca, la Regió valona i la Regió Brussel·les-Capital.

### **3. Qüestions prejudicials (article 267 TFUE/ex article 234 TCE)**

#### *3.1. Qüestions prejudicials d'interpretació*

##### **A. Accés del públic a la informació mediambiental**

El desembre de 2010, el Tribunal de Justícia va dictar dues sentències prejudicials que aborden la qüestió de l'accés del públic a la informació mediambiental.

En la primera d'elles, la *sentència de 16 de desembre de 2010, assumpte C-266/09, Stichting Natuur en Milieu et al. c. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden*, el Tribunal resol una petició de decisió prejudicial plantejada pel College van Beroep voor het bedrijfsleven (Països Baixos) en el marc d'un recurs interposat per les associacions actores contra una resolució del

---

<sup>10</sup> Sentència, § 81.

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen a biocides (CTGB), mitjançant la qual els va denegar comunicar determinats estudis i protocols de proves relatius als residus i a l'eficàcia de la substància activa *propamocarb* a l'enciam. Aquests estudis i protocols havien servit de base per a la modificació el 1999 de l'Ordre Ministerial holandesa sobre residus de plaguicides, fixant el nou contingut màxim autoritzat de residus del plaguicida *propamocarb* a l'enciam a 15 mg/kg.

La petició del tribunal de remissió tenia per objecte la interpretació de la Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització de productes fitosanitaris i de la Directiva 2003/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, relativa a l'accés del públic a la informació mediambiental.

En particular, mitjançant la seva primera qüestió prejudicial, el tribunal de remissió demanava que el Tribunal de Justícia determinés si els estudis i protocols d'estudi sobre el terreny relatius l'eficàcia del *propamocarb* a l'enciam, que havien servit de base per a la modificació en 1999 de l'Ordre ministerial, incrementant el contingut màxim autoritzat dels seus residus a l'enciam, constitueixen 'informació mediambiental' en el sentit de l'article 2.1 de la Directiva 2003/4/CE i queden per tant coberts pel seu àmbit d'aplicació<sup>11</sup>.

El Tribunal de Justícia respon afirmativament a aquesta qüestió prejudicial, tenint en compte que la resolució recorreguda per les associacions actores en el litigi principal s'inscriu en un procediment d'autorització d'un producte fitosanitari inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/414/CEE, que té per objecte l'avaluació dels riscos i perills per a les persones, els animals i el medi ambient. Precisament, en els termes de l'article 2.1, f) de la Directiva 2003/4/CE, s'ha d'entendre per 'informació mediambiental' als efectes de la mateixa

*... el estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria..., cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c)*<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Sentència, § 37.

<sup>12</sup> De conformitat amb aquestes disposicions, forma part del concepte legal d 'informació mediambiental' tota informació relativa a: "... la situación de elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos; b) factores como

Així doncs, en la mesura en què l'aportació de dades sobre la presència de residus de productes fitosanitaris en vegetals permet contrastar el contingut màxim autoritzat per al pesticida en qüestió i limitar així els riscos d'impacte sobre els components de la diversitat biològica i de la dispersió d'aquest factor químic en elements del medi ambient com ara el sòl o les aigües subterrànies, s'ha de considerar 'informació mediambiental'<sup>13</sup>.

Per mitjà de la segona qüestió prejudicial, el tribunal de remissió demanava que el Tribunal de Justícia dilucidar la relació entre l'article 14 de la Directiva 91/414/CEE i l'article 4.2 de la Directiva 2003/4/CE. L'article 14 de la Directiva 91/414 estableix el procediment en virtut del qual la Comissió o els Estats membres, prèvia sol·licitud de la part interessada, haurà de protegir la confidencialitat de la informació que constitueixi secret industrial o comercial i que aquesta part ha transmès en el marc del procediment d'autorització d'un producte fitosanitari. De conformitat amb el cinquè guió del paràgraf segon d'aquesta disposició, la protecció de la confidencialitat no es pot aplicar *“al resumen de los resultados de las pruebas para determinar la eficacia del producto y su inocuidad para el hombre, los animales, los vegetales y el medio ambiente”*.

Per la seva banda, l'article 4 de la Directiva 2003/4 regula les excepcions a l'obligació de les autoritats públiques a posar a disposició de qualsevol sol·licitant la informació mediambiental, entre les causes el paràgraf 2, d) fa referència expressa a l'afectació a *“la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial cuando dicha confidencialidad esté contemplada en la legislación o comunitaria a fin de proteger intereses económicos legítimos...”*. No obstant això, els motius de denegació que preveu l'article 4 han de ser interpretats restrictivament, *“... teniendo en cuenta para cada caso concreto el interés público atendido por la divulgación...”*, que *“... deberá ponderarse [en cada cas específic] con el interés atendido por la denegación de la divulgación”*. Tot i així, l'interès en la protecció de la confidencialitat de les dades de

---

*sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los slsmentos del medio ambiente citados en la letra a); c) medidas (incluidas las medidas administrativas) como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos; ...”* (art. 2.1 Directiva 2003/4/CE).

<sup>13</sup> Sentència, §§ 38-43.



caràcter comercial i industrial no pot justificar en cap cas la denegació de sol·licituds relatives a informació sobre emissions al medi ambient (article 4.2 Directiva 2003/4). De conformitat amb la posició adoptada pel Tribunal de Justícia, “... *lo dispuesto en el ... artículo 14 [de la Directiva 91/414] debe interpretarse en el sentido de que sólo resulta aplicable en la medida en que no afecte negativamente al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del [artículo 4.2] de la Directiva 2003/4*”<sup>14</sup>, és a dir, la impossibilitat de negar sol·licituds d’informació mediambiental que poguessin afectar negativament a la confidencialitat de dades industrials o comercials, quan aquests fan referència a emissions en el medi ambient.

Mitjançant la seva tercera i última qüestió prejudicial, el tribunal remitent demanava al Tribunal de Justícia dilucidar si l’obligació imposada a les autoritats competents de ponderar cas per cas l’interès públic atès per la divulgació informació mediambiental i l’interès específic atès per la preservació del seu confidencialitat en virtut de l’article 4.2 de la Directiva 2003/4/CE podia ser definida en una mesura general adoptada pel legislador nacional, tal com succeeix en l’article 22 de la Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Llei neerlandesa de plaguicides). Referent a això, el Tribunal és taxatiu al reafirmar l’obligatorietat de la ponderació cas per cas de l’interès públic en la divulgació de la informació ambiental amb l’interès específic en la preservació de la seva confidencialitat. No obstant això, admet la possibilitat que el legislador “...*pueda establecer mediante una disposición de carácter general criterios que permitan facilitar esa apreciación comparada de los intereses en juego*”, en cada cas específic<sup>15</sup>.

En la seva sentència de 22 de desembre de 2010, assumpte C-524/09, *Ville de Lyon c. Caisse des dépôts et consignations* el Tribunal de Justícia resol una petició de decisió prejudicial del Tribunal administratiu de Paris presentada en el marc del recurs contenciós-administratiu plantejat per la Ville de Lyon contra la decisió de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de denegar l’accés a la informació relativa al volum de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle venuts durant l’any 2005 pels titulars de les plantes de calefacció urbana situades a França, sobre la base de l’article

---

<sup>14</sup> *Ibíd.*, § 54.

<sup>15</sup> *Ibíd.*, § 58.

10 del Reglament (CE) núm. 2216/2004 i en els punts 11 i 12 de l'annex XVI del mateix.

El Tribunal de Justícia va abordar en primer lloc la segona qüestió prejudicial, en virtut de la qual el Tribunal administratiu de París demanava que es dilucidar si la comunicació de les dades i informacions que demanava la Ville de Lyon s'ha de regir per alguna de les excepcions previstes l'article 4 de la Directiva 2003/4/CE o per les disposicions de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la Comunitat<sup>16</sup>, i del Reglament (CE) núm. 2216/2004 de la Comissió, de 21 de desembre de 2004, relatiu a un sistema normalitzat i garantit de registres de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE<sup>17</sup>. Referent a això, el Tribunal de Justícia considera que, per contraposició al règim general d'accés del públic a la informació que estableix l'article 17 de la Directiva 2003/87/CE —que remet a la Directiva 2003/4— l'article 19 de la Directiva 2003/87/CE regula el registre que cada Estat membre ha de crear per portar compte exacta de l'expedició, la titularitat, la transferència i la cancel·lació de drets d'emissió, establint per a tals dades “... un régimen específico y exhaustivo de comunicación al público ... y de confidencialidad de los mismos”<sup>18</sup>.

A continuació, el Tribunal de Justícia passa a abordar de manera conjunta la tercera i quarta qüestió prejudicial, que estaven dirigides a dilucidar si, en virtut dels punts 11 i 12 de l'annex XVI del Reglament (CE) núm. 2216/2004, la publicació dades com les demanades per la Ville de Lyon ha de realitzar un cop finalitzat el termini de cinc anys posterior a l'any en què es completi cada transacció amb drets d'emissió, o si es tracta de la publicació de la informació corresponent a totes les transaccions realitzades durant un període quinquennal d'assignació sota la Directiva 2003/87. En cas que la publicació hagi de realitzar-se un cop finalitzat el termini de cinc anys posterior a l'any en què es completi cada transacció, el Tribunal administratiu de París demanava saber, a més, si el motiu al·legat per la Ville de Lyon —la renegociació d'un conveni d'arrendament amb l'operadora d'una instal·lació de calefacció urbana— constituïa un motiu suficient per aixecar la confidencialitat de la informació sol·licitada sota l'article 10.1 del Reglament. De conformitat amb aquesta disposició,

---

<sup>16</sup> DOUE, L 275, de 25 d'octubre de 2003, p. 32-46.

<sup>17</sup> DOUE, L 386, de 29 de desembre de 2004, p. 1-77.

<sup>18</sup> Sentència, § 40 (èmfasi propi).

*“[t]oda la información contenida en los registros y en el [diari independent de transaccions comunitàries], lo cual incluye los haberes de todas las cuentas y la totalidad de las transacciones efectuadas, se considerará confidencial para cualquier efecto que no sea la aplicación de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, en la Directiva 2003/87/CE o en la legislación nacional”*<sup>19</sup>.

Referent a això, el Tribunal de Justícia constata que senzillament que el motiu invocat per la Ville de Lyon no constitueix, en principi, una activitat d'aplicació dels requisits establerts en el Reglament, a la Directiva o en la legislació nacional<sup>20</sup>. D'altra banda, el Tribunal interpreta les articles 9 i 10 del Reglament, en relació amb les punts 11 i 12 del seu annex XVI en el sentit que, si no hi ha consentiment previ dels titulars dels comptes corresponents en el registre, les dades que hi són consignades només són de lliure consulta pel públic en general a partir del 15 de gener del cinquè any (X +5) següent a l'any (X) en què es completin les transaccions relatives a les transferències de drets<sup>21</sup>.

Finalment, el Tribunal de Justícia aborda la primera de les qüestions prejudicials plantejades per l'òrgan jurisdiccional de remissió, que està dirigida a saber si l'administrador del registre nacional és competent per a denegar la comunicació de les dades assentats en el registre, la comunicació a través de la pàgina web del diari independent de transaccions comunitàries (DITC) és però competència de l'administrador central nomenat per la Comissió Europea.

Sobre aquest particular, el Tribunal interpreta les articles 9 i 10 del Reglament (CE) núm. 2216/2004, en relació amb les punts 11 i 12 del seu annex XVI, en el sentit segons el qual l'administrador central és certament l'únic competent per comunicar al públic en general les dades com les demanats per la Ville de Lyon, una vegada que ha transcorregut el termini de cinc anys des de la conclusió de la transacció de drets d'emissió. Fins llavors, però, és l'administrador del registre nacional qui ha de denegar una sollicitud d'accés a aquestes dades, ja que està obligat a preservar la confidencialitat dels mateixos a no ser que hi hagi consentiment previ dels titulars dels comptes corresponents<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Èmfasi propi.

<sup>20</sup> Sentència, § 48.

<sup>21</sup> *Ibíd.*, §§ 51-53.

<sup>22</sup> *Ibíd.*, §§ 55-59.

## B. Participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient

En el període comprès en aquesta crònica, el Tribunal de Justícia ha dictat dues sentències relatives a peticions de decisió prejudicial relatives a la participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient. En la primera d'elles, el Tribunal ha declarat l'absència d'efecte directe de l'article 9.3 del Conveni d'Aarhus. En la segona, el Tribunal ha declarat l'efecte directe de l'article 10 bis de la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient<sup>23</sup>, en la versió modificada per la Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003<sup>24</sup>, i la seva aplicació preferent sobre les disposicions de la *Verwaltungsgerichtsordnung* —la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa alemanya— que limiten la legitimació activa per a la interposició d'un recurs d'anul·lació d'un acte administratiu a aquells supòsits en què el demandant demostrï la lesió dels seus drets subjectius públics per l'acte administratiu.

Mitjançant la seva *sentència de 8 de març de 2011, assumpte C-240/09, Lesoochránárske zoskupenie VLK c. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky*, el Tribunal de Justícia —en la seva formació de Gran Sala— va resoldre una petició de decisió prejudicial plantejada pel Najvyšší sud Slovenskej republiky (Eslovàquia), en relació amb el recurs contenciós-administratiu interposat per una organització ecologista contra la desestimació del seu recurs previ contra una decisió del Ministeri de medi ambient eslovac denegant-li la seva compareixença com a part en un procediment administratiu relatiu a la concessió d'excepcions al règim de protecció d'espècies protegides —en particular, l'ós bru— a l'accés als espais naturals protegits i a la utilització de productes químics en aquests espais.

Referent a això, la part actora invocava les disposicions de l'article 9.3 del Conveni d'Aarhus sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, de 25 de juny de 1998, del qual són part la Unió Europea i els seus Estats membres, al·legant el seu 'efecte directe' de conformitat amb el Dret de la Unió. De conformitat amb aquesta disposició del Conveni d'Aarhus,

---

<sup>23</sup> Vegeu nota núm. 9.

<sup>24</sup> DOUE, L 156, de 25 de junio de 2003, p. 17-25.

*...cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional.*

En aquest context, el tribunal de remissió va plantejar les següents qüestions prejudicials:

- 1) A la luz del objetivo principal perseguido por el Convenio de Aarhus, a saber, reformar el concepto clásico de legitimación activa reconociendo la posición de parte procesal al público, o bien al público interesado, ¿puede reconocerse al artículo 9 de dicho tratado internacional, y en particular a su apartado 3, la eficacia autoejecutiva de los tratados internacionales, puesto que la Unión Europea se adhirió a dicho Convenio..., pero no ha adoptado todavía normas para adaptar el ordenamiento jurídico comunitario a aquél?*
- 2) ¿Puede reconocerse al artículo 9 del Convenio de Aarhus, en particular a su apartado 3, una vez integrado en el ordenamiento jurídico comunitario, la aplicabilidad inmediata o la eficacia directa del Derecho comunitario de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia?*
- 3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda, ¿puede interpretarse el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, a la luz del objetivo principal perseguido por dicho convenio internacional, en el sentido de que por “acci[ón] de autoridades públicas” debe entenderse también la adopción de una decisión? Es decir, el derecho del público a participar en un procedimiento judicial, ¿comprende el derecho a impugnar las decisiones de una autoridad pública cuya ilegalidad repercute en el medio ambiente?<sup>25</sup>*

La Gran Sala aborda les dues primeres qüestions prejudicials de manera conjunta. Per a això, part de la premissa del caràcter vinculant per les institucions de la Unió i per les Estats membres dels acords celebrats de conformitat amb el procediment previst en l'article 218 TFUE (ex article 300 TCE) i que, com el Conveni d'Aarhus, passen a formar part de l'ordenament jurídic de la Unió a partir de la seva aprovació mitjançant la Decisió 2005/370/CE<sup>26</sup>. Atesa la celebració d'aquest tractat sobre la base d'una competència compartida entre la Unió i els seus estats membres, el Tribunal de Justícia es declara competent en seu prejudicial per establir la línia divisòria entre les obligacions assumides per la Unió i les que segueixen incumbint únicament a les

<sup>25</sup> Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 8 de març de 2011, asunto C-240/09, Lesoochranské zoskupenie VLK c. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, § 23.

<sup>26</sup> Decisió 2005/370/CE del Consell, de 17 de febrer de 2005, sobre la celebració, en nom de la Comunitat Europea, del Conveni sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient (DOUE, L 124, de 17 de maig de 2005, p. 1-3).

Estats membres, i interpretar en conseqüència les disposicions del Conveni d'Aarhus<sup>27</sup>.

En aquest context és rellevant la Declaració que figura en l'annex de la Decisió 2005/370/CE, en la qual es fa constar que

*... los instrumentos legales [comunitarios] vigentes no abarcan totalmente la puesta en práctica de las obligaciones derivadas del artículo 9, apartado 3, del Convenio, por cuanto se refieren a los procedimientos administrativos y judiciales para impugnar acciones u omisiones de personas privadas y de autoridades públicas distintas de las instituciones de la Comunidad Europea a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra d), del Convenio; por lo tanto, los Estados miembros son responsables de poner en práctica dichas obligaciones para la fecha en que la Comunidad Europea apruebe el Convenio, y seguirán siéndolo a menos o hasta que la Comunidad, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Tratado CE, adopte disposiciones de Derecho comunitario que engloben la puesta en práctica de dichas obligaciones.*

Amb posterioritat es va adoptar el Reglament (CE) núm. 1367/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 2006, relatiu a l'aplicació, a les institucions i als organismes comunitaris, de les disposicions del Conveni d'Aarhus sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient<sup>28</sup>.

En aquest context, el Tribunal adopta la posició segons la qual ni els termes literals de la Declaració annexada a la Decisió 2005/370/CE esmentada, ni la limitació de l'àmbit d'aplicació del Reglament (CE) núm. 2367/2006 a les institucions i organismes comunitaris, impedeixen a priori l'aplicació de l'article 9.3 del Conveni d'Aarhus en relació amb els procediments administratius o judicials nacionals com a part integrant de l'ordenament jurídic comunitari. La Gran Sala fonamenta aquesta posició sobre la base de la competència externa explícita de la Unió Europea en l'àmbit de la política de medi ambient<sup>29</sup>, així com la línia jurisprudencial adoptada en la seva sentència de 7 d'octubre de 2004, assumpte C-239/03, Comissió c. França<sup>30</sup>, en virtut de la qual

*... una cuestión concreta que aún no ha sido regulada por una normativa de la Unión incumbe al Derecho de la Unión cuando tal cuestión se regula en*

---

<sup>27</sup> Sentència, § 31.

<sup>28</sup> DOUE, L 264, de 25 de setembre de 2006, p. 13-19.

<sup>29</sup> Arts 191.4 i 192 TFUE (ex arts. 174.2 i 175 TCE).

<sup>30</sup> Recueil 2004, p. I-9325, §§ 29-31.

*acuerdos celebrados por la Unión y por sus Estados miembros y se refiere a un ámbito ampliamente cubierto por ese Derecho*<sup>31</sup>.

El fet que la part actora en el litigi principal reclami ser ‘part’ en un procediment administratiu nacional relatiu a la concessió d’ excepcions al règim de protecció d’espècies protegides que, com l’ós bru, es troben enumerades en l’annex IV de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres<sup>32</sup>, implica doncs l’aplicació de l’article 9.3 del Conveni d’Aarhus a una situació que es regeix tant pel Dret nacional, com pel dret de la Unió. En conseqüència, el Tribunal considera que “... existe un interés comunitario manifiesto en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, dicha disposición reciba una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que tenga que aplicarse”<sup>33</sup>.

Basant-se en aquesta apreciació, procedeix a analitzar si l’article 9.3 del Conveni d’Aarhus té o no efecte directe: a això la Gran Sala constata que aquesta disposició no estableix una obligació clara i precisa que determini directament la situació jurídica dels particulars, sinó que subordina la legitimació activa dels membres del públic als eventuals criteris previstos pel dret intern. Així doncs, la disposició en qüestió no té efecte directe, el desenvolupament normatiu i configuració correspon al dret intern de cada Estat membre.

No obstant això, tractant-se de la regulació processal per cada Estat membre d’una acció destinada a garantir la tutela dels drets que l’ordenament jurídic de la Unió reconeix als particulars en virtut de l’article 9.3 del Conveni d’Aarhus, els Estats han d’articular recursos efectius i equivalents als de dret intern en la seva aplicació<sup>34</sup>. En els termes utilitzats pel Tribunal en aquesta sentència,

*De ello resulta que, cuando se trata de una especie protegida por el Derecho de la Unión y en particular por la Directiva sobre los “hábitats”, corresponde al juez nacional, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho medioambiental de la Unión, interpretar su Derecho nacional de manera conforme, en la medida de lo posible, a los objetivos del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus*<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Sentència, § 36.

<sup>32</sup> DOCE, L 206, de 22 de juliol de 1992, p. 7-50.

<sup>33</sup> Sentència, § 40.

<sup>34</sup> *Ibíd.*, §§ 47 y 48.

<sup>35</sup> *Ibíd.*, § 50.

Mitjançant la seva *sentència de 12 de maig de 2011, assumpte C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV c. Bezirksregierungen Arnsberg*, el Tribunal de Justícia resol una petició de decisió prejudicial del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemanya) relativa a la interpretació de la Directiva 85/337/CEE, plantejada en el marc d'un litigi entre l'associació de Rin del Nord-Westfàlia del Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland i la Bezirksregierungen Arnsberg, en relació amb una autorització concedida a Trianel Kohlekraftwerk GmbH, per a la construcció i explotació d'una central tèrmica a prop de cinc àrees designades zones protegides per la normativa nacional.

En la seva resolució de remissió, el Oberverwaltungsgericht explicitava la seva apreciació segons la qual l'autorització concedida a Trianel era contrària a l'article 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, en la mesura que l'avaluació de l'impacte ambiental del projecte no demostrava que aquest no tingués incidència significativa sobre les zones especials de conservació properes. D'altra banda, el tribunal de remissió també explicava que la legitimació activa de les organitzacions no governamentals en el règim general de recursos d'anulació previst en la Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) està condicionada a la vulneració dels drets del recurrent, és a dir, els seus drets subjectius públics. No obstant això, el dret intern aplicable en matèria de protecció contra la contaminació i de protecció de l'aigua i de la natura no tindria per objecte la protecció d'aquests drets, ni resultaven aplicables cap de les excepcions previstes en la legislació alemanya que eximien a les associacions de protecció del medi ambient d'aquest requisit d'admissibilitat dels recursos. Davant aquestes circumstàncies, el Oberverwaltungsgericht va plantejar una sèrie de qüestions prejudicials.

Per mitjà de les dues primeres qüestions remeses, que el Tribunal de Justícia va examinar de forma conjunta, el tribunal remitent sol·licitava que es dilucidés si l'article 10 bis de la Directiva 85/337 admet una normativa interna que no reconeix a les 'organitzacions no governamentals que actuen en favor de la protecció del medi ambient (article 1.2 Directiva 85/337) la possibilitat d'invocar en judici disposicions que protegeixen interessos col·lectius, en el marc d'un recurs contra una decisió d'autorització de projectes que puguin tenir' repercussions importants sobre el medi



ambient (article 1.1 Directiva 85/337). Així mateix, en cas de resposta afirmativa, desitjava saber si l'article 10 bis de la Directiva s'oposava de manera general a aquesta normativa, o només en la mesura que impedeix a les associacions ecologistes invocar determinades disposicions —nacionals o comunitàries— de Dret ambiental.

El Tribunal de Justícia basa la seva resposta en una interpretació literal i teleològica de les disposicions de l'article 10 bis de la Directiva 85/337. A tenor del paràgraf primer d'aquest precepte, els membres del públic interessat han de poder presentar un recurs davant un tribunal de justícia o un altre òrgan independent i imparcial establert per la llei per impugnar, quant al fons o quant al procediment, la legalitat de decisions, accions o omissions recollides en aquest article, a condició de tenir un 'interès suficient' o, alternativament, invocar el 'menyscabament d'un dret'. Així mateix, en l'aplicació d'aquesta disposició els Estats han de perseguir l'objectiu de facilitar al públic interessat un ampli accés a la justícia. En particular, el paràgraf tercer de l'article 10 bis estableix que “... [s]e considerará que toda organización no gubernamental [que actúa a favor de la protección del medio ambiente] tiene siempre interés suficiente... o acredita el menoscabo de un derecho...”. Així doncs, corresponent a l'ordenament jurídic de cada Estat membre la designació dels òrgans jurisdiccionals competents i la regulació processal dels recursos destinats a garantir la protecció dels drets que el Dret de la Unió confereix als justiciables, el Tribunal de Justícia considera no obstant que els principis d'equivalència i d'efectivitat exigeixen que la seva regulació processal no ha de ser menys favorable que la referent a recursos semblants de dret intern, ni fer a la pràctica impossible o excessivament difícil l'exercici dels drets conferits per l'ordenament jurídic de la Unió<sup>36</sup>.

Sobre la base d'aquesta interpretació, el Tribunal considera que el legislador alemany pot condicionar la legitimació activa dels particulars en el marc d'un recurs jurisdiccional contra les decisions, actes o omissions que preveu l'article 10 bis de la Directiva 85/337 a la vulneració dels seus drets públics subjectius. No obstant això, l'aplicació d'aquest requisit a les organitzacions no governamentals ambientalistes seria incompatible amb la Directiva 85/337. En particular, la imposició de les mateixes condicions per a l'exercici de la legitimació activa als particulars en defensa dels seus interessos privats i les associacions o organitzacions amb la finalitat de la protecció d'interessos col·lectius és contrari al principi d'efectivitat i l'objectiu

---

<sup>36</sup> Sentència, § 43.

d'assegurar un ampli accés a la justícia al 'públic interessat' en el sentit de l'article 1.2 de la Directiva 85/337. Per tant, el Tribunal conclou per afirmar que

*... el artículo 10 bis, párrafo tercero, última frase, de la Directiva 85/337, debe interpretarse en el sentido de que, entre los "derechos susceptibles de sufrir un menoscabo", derechos cuya titularidad se reconoce a las asociaciones de defensa del medio ambiente, deben figurar necesariamente las normas de Derecho nacional que aplican la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, así como las normas de Derecho de la Unión de medio ambiente de efecto directo<sup>37</sup>.*

Finalment, per al cas en què el Oberverwaltungsgericht no pogués interpretar la VwGO alemanya de conformitat amb les exigències de l'article 10 bis de la Directiva 85/337, la seva tercera qüestió prejudicial anava dirigida a esbrinar si una associació ambientalista pot fundar un recurs contra una autorització de projectes que puguin tenir importants repercussions sobre el medi ambient en el sentit de l'article 1.1 d'aquesta Directiva, tot i que el Dret processal intern no ho permeti.

El Tribunal de Justícia respon a aquesta qüestió declarant l'efecte directe de la disposició continguda en l'última frase del paràgraf tercer de l'article 10 bis de la Directiva 85/337 en la mesura que, des del punt de vista del seu contingut, no està subjecta a condició i és prou precisa<sup>38</sup>.

### C. Avaluació de l'impacte ambiental

En la seva sentència de 17 de març de 2011, assumpte C-275/09, *Brussels Hoofdstedelijk Gewest et al. c. Vlaams Gewest*, coadjuvat per The Brussels Airport Company NV, el Tribunal de Justícia resol una petició de decisió prejudicial plantejada pel Consell d'Estat belga sobre la interpretació del punt 7, lletra a) de l'annex I de la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, en relació amb una resolució de la Vlaams Gewest (Regió flamenca) sobre l'explotació de l'aeroport de Brussel·les-Nacional.

Aquest aeroport està situat en territori de la Regió flamenca i disposa de diverses pistes de més de 2100 metres de longitud. La seva explotació està subjecta a la concessió d'una autorització mediambiental des de l'any 1999. L'any 2000,

---

<sup>37</sup> *Ibíd.*, § 48.

<sup>38</sup> *Ibíd.*, §§ 53-59.

l'operadora de l'aeroport va obtenir la primera autorització mediambiental per una durada de cinc anys, que va ser modificada en diverses ocasions dins d'aquest termini per reduir dels nivells de contaminació acústica. La tramitació dels procediments corresponents no va implicar en cap moment la realització d'una avaluació d'impacte ambiental. El 2004, la companyia operadora de l'aeroport va sol·licitar la pròrroga de l'autorització mediambiental, així com una autorització per a l'ampliació d'aquest. La sol·licitud d'ampliació va ser desestimada per la Diputació Permanent del Consell Provincial del Brabant flamenc. Per la seva banda, l'autorització mediambiental per a la seva explotació va ser prorrogada, sense que es considera necessària una avaluació d'impacte ambiental.

Aquesta última decisió va ser objecte de recurs administratiu sobre la base del caràcter preceptiu de l'avaluació de l'impacte ambiental. No obstant això, el ministre flamenc d'Obres públiques, Energia, Medi ambient i Natura va confirmar la decisió de la Diputació Permanent. En particular, el ministre va basar la seva decisió tant en la normativa flamenca, com en l'article 4.1 de la Directiva 85/337/CEE, en relació amb el punt 7, a) del seu annex I. Aquesta disposició fa referència a la “[c]onstrucción... de aeropuertos cuya pista básica de aterrizaje sea de al menos 2100 metros de longitud” com a projecte l'autorització del qual requereix prèvia avaluació de l'impacte ambiental. A continuació, les parts actives en el litigi principal van interposar recurs contenciós-administratiu davant el Consell d'Estat contra la decisió del Ministre. Aquest òrgan jurisdiccional va plantejar un seguit de qüestions prejudicials que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va abordar de forma conjunta. Les qüestions plantejades eren les següents:

- 1) *Cuando se requieren distintas autorizaciones, por un lado, para obras de infraestructura en un aeropuerto con una pista de despegue y aterrizaje de al menos 2100 metros de longitud y, por otro lado, para la explotación de ese aeropuerto, y esta última autorización –la autorización medioambiental– sólo se concede por un período determinado, ¿debe entenderse el término “construcción”, utilizado en el punto 7, letra a), del anexo I de la [Directiva 85/337] en el sentido de que no sólo debe procederse a una evaluación de impacto ambiental para la realización de las obras de infraestructura, sino también para la explotación del aeropuerto?*
- 2) *¿Esta evaluación obligatoria del impacto ambiental se aplica también a la renovación de la autorización medioambiental del aeropuerto, tanto en el caso de que dicha renovación no implique modificación o ampliación alguna de la explotación como en el caso de que se prevea tal modificación o ampliación?*
- 3) *A efectos de la obligación de proceder a una evaluación de impacto ambiental en caso de renovación de una autorización medioambiental para un aeropuerto,*

*¿es diferente la situación si, con motivo de una autorización de explotación anterior, ya se había realizado una evaluación de impacto ambiental, o si el aeropuerto ya estaba en explotación en el momento en que el legislador comunitario o nacional introdujo la evaluación de impacto ambiental?*<sup>39</sup>

En la seva sentència, el Tribunal de Justícia part d'una interpretació estricta del terme 'projecte', en el sentit de l'article 1.2 de la Directiva 85/337, que delimita el seu àmbit d'aplicació *ratione materiae*. Referent a això, el Tribunal considera que el terme 'projecte' utilitzat en l'article 1.2 de la Directiva, posat en relació amb el terme 'construcció' emprat en el punt 7, a) del seu annex I, implica necessàriament la realització d'obres o intervencions que modifiquin la realitat física de l'emplaçament, raó per la qual la renovació d'una autorització d'explotació d'un aeroport *per se* no podria ser qualificada com a tal<sup>40</sup>.

No obstant això, fent-se ressò de les al·legacions presentades per les parts actives en el litigi principal en el sentit que des de l'expiració del termini de transposició de la Directiva 85/337 s'haurien realitzat obres de modificació de la infraestructura de l'aeroport en successives etapes, sense que s'hagués efectuat una avaluació d'impacte ambiental, el Tribunal de Justícia reafirma la seva jurisprudència segons la qual l'objectiu de la normativa de la Unió no es pot eludir mitjançant un fraccionament dels projectes i sense que es tingui en compte el seu efecte acumulatiu<sup>41</sup>.

En conseqüència, per tal d'assegurar l'efecte útil de la Directiva, el Tribunal de Justícia declara que correspon a l'òrgan jurisdiccional de remissió determinar si, tenint en compte l'efecte acumulatiu de les diferents obres realitzades, la pròrroga de l'autorització d'explotació no es inserida en un procediment d'autorització amb diverses etapes, que en conjunt constitueixen un 'projecte' que requereixi d'avaluació d'impacte ambiental<sup>42</sup>.

D. Seguretat de la biotecnologia: indemnització dels operadors en el sector agroalimentari els cultius són 'contaminats' per pol·len genèticament modificat  
Acabem aquest apartat de la crònica fent esment de les *conclusions de l'Advocat General Yves BOT relatives a la petició de decisió prejudicial plantejada pel Bayerischer Verwaltungsgerichtshof en l'assumpte C-442/09, Karl Heinz Bablok et*

---

<sup>39</sup> Sentència, § 18.

<sup>40</sup> *Ibíd.*, § 24.

<sup>41</sup> *Ibíd.*, § 36.

<sup>42</sup> *Ibíd.*, § 38.

*al. contra Freistaat Bayern*, que van ser presentades el 9 de febrer de 2011. En elles es proposen al Tribunal de Justícia criteris per a la interpretació del Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament<sup>43</sup>. En particular, es pretén dilucidar el règim jurídic d'aliments que —com la mel— són elaborats amb pol·len, i en els quals es detecta la presència no intencionada de pol·len procedent de plantes modificades genèticament, la presència dels quals en aliments i/o pinsos només ha estat autoritzada per la Comissió en casos específics sota el règim del Reglament (CE) núm. 1829/2003.

La transcendència d'aquesta qüestió és que— com assenyala el propi advocat general— de la resposta que es doni a aquesta qüestió dependrà “... *que se reconozca, en el litigio principal, un derecho de indemnización pecuniaria a apicultores que explotan colmenas en las inmediaciones de terrenos propiedad del Freistaat Bayern, en los que durante los últimos años se ha cultivado maíz modificado genéticamente MON 810 con fines de investigación*”<sup>44</sup>. No obstant això, més enllà de l'assumpte d'actuacions, la interpretació que finalment aculli el Tribunal de Justícia en el present cas marcarà, sens dubte, un destacat precedent jurisprudencial sobre la indemnització dels operadors econòmics en el sector agroalimentari els cultius dels quals resultin ‘contaminats’ per material genètic procedent de plantes modificades genèticament cultivades als voltants de les seves instal·lacions.

A aquests efectes, la principal qüestió jurídica que aborda l'advocat general és la possible qualificació dels productes dels operadors econòmics afectats per la contaminació transgènica com ‘aliment modificat genèticament’, que quedaria subjecte al règim d'autorització de comercialització, supervisió i etiquetatge del Reglament (CE) núm. 1829/2003<sup>45</sup>.

#### D.1. Litigi principal davant la jurisdicció alemanya

De conformitat amb la Directiva 90/220/CEE, la Comissió Europea va autoritzar mitjançant la Decisió 98/294/CE, de 22 d'abril de 1998<sup>46</sup>, la comercialització de blat de moro genèticament modificat de la línia MON 810 de l'empresa Monsanto. Aquest

---

<sup>43</sup> DOUE, L 268, de 18 d'octubre de 2003, p. 1-23.

<sup>44</sup> Conclusions, § 4.

<sup>45</sup> *Ibíd.*, § 5.

<sup>46</sup> DOCE, L 131, de 5 de maig de 1998, p. 32-33.

tipus de blat de moro ha estat modificat mitjançant la inclusió d'un gen propi d'un tipus de bacteri, el *Bacillus thuringiensis* (Bt), que li permet sintetitzar una toxina que actua contra les erugues del barrinador del blat de moro —un tipus de papallona perjudicial per a la planta de blat de moro— destruint les seves cèl·lules intestinals.

Determinats productes derivats d'aquesta línia de blat de moro —la farina, el gluten, la sèmola, el midó, la glucosa i l'oli de blat de moro derivat de la mateixa— també van ser objecte d'autorització sota el Reglament (CE) núm. 258/97, i integrats ulteriorment en el règim del Reglament 1829/2003. Des de la seva expiració el 2007, Monsanto va sol·licitar una renovació de les autoritzacions, que de conformitat amb l'article 11.4 del Reglament 1829/2003 quedaven automàticament prorrogades fins a l'adopció de la corresponent decisió per la Comissió Europea. Aquesta sol·licitud encara es troba en fase d'estudi.

Igual que havien fet les autoritats competents en altres cinc Estats membres de la Unió Europea, l'Oficina Federal Alemanya de protecció dels consumidors i de seguretat alimentària va prohibir el 2009 el cultiu de blat de moro de la línia MON 810 i va acordar la suspensió temporal de la autorització de comercialització<sup>47</sup>. Fins a l'adopció d'aquesta mesura, l'Estat de Baviera havia autoritzat el cultiu de blat de moro MON 810 amb fins d'investigació en terrenys de la seva propietat. El 2005, el pol·len de blat de moro recollit pel Sr Bablok —apicultor no professional i actor en el litigi principal— en els seus ruscus situats a uns 500 metres d'una de les finques agrícoles experimentals de l'Estat de Baviera contenia ADN MON 810, així com la toxina Bt. Així mateix, la mel produïda en dits ruscus també contenia petites quantitats d'aquest ADN, com a conseqüència de la incorporació al mateix d'aquell pol·len.

Sota la iniciativa del Sr Bablok, diversos apicultors no professionals, els ruscus dels quals es troben als voltants d'aquests terrenys, van demandar l'Estat de Baviera en la

---

<sup>47</sup> Aquesta decisió es basava en una avaluació científica de les dades obtingudes en el marc del seguiment del cultiu del blat de moro MON 810, que indicava la presència d'importants efectes ambientals no tinguts en compte en el moment de la seva autorització. En particular, la mesura es fonamenta en les dades sobre la persistència de la toxina Bt en el sòl dels terrenys cultivats amb aquesta línia de blat de moro (més de 200 dies), la seva solubilitat en l'aigua de reg i, per tant, la seva àmplia dispersió en dels ecosistemes aquàtics. D'altra banda, també es disposaven de dades toxicològiques que posaven de manifest que la toxina Bt no afectava específicament a l'eruga del barrinador del blat de moro, sinó que afectava indistintament a un nombre significativament major de coleòpters, lepidòpters i altres larves d'insectes terrestres i aquàtics, algunes de les quals constituïen espècies protegides o en perill d'extinció. Veure referent a això la notificació de la resolució a l'empresa Monsanto, a *Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Abteilung Gentechnik, Akt.-Z. 6788-02-13 (C/F/95/12-02), 17. April 2009*.

seva qualitat de propietari de les finques agrícoles experimentals, al·legant que les activitats allà desenvolupades havien causat una ‘modificació substancial’ dels seus productes d’apicultura en el sentit de l’article 36 de la Llei federal de Regulació de la Tecnologia Genètica de 20 de juny de 1990 (Gesetz zur Regelung der Gentechnik, BGBl. 16.12.1993, I S. 2066) i del § 906.2 BGB, que impedia la seva comercialització i consum. Com a conseqüència d’això, se’ls produïa un dany patrimonial la indemnització del qual reclamaven.

Mitjançant sentència de 30 de maig de 2008, el Bayerisches Verwaltungsgericht d’Augsburg va estimar la demanda en primera instància, en considerar que la incorporació del pol·len de blat de moro MON 810 als productes d’apicultura de les parts demandants implicava una modificació dels mateixos que exigia que la seva comercialització com a aliments quedés subjecta a autorització de conformitat amb l’article 4.2 del Reglament (CE) núm. 1829/2003. Aquesta sentència va ser objecte d’apel·lació davant el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof per les actores, per l’Estat de Baviera i per Monsanto (Monsanto Technology LLC i Monsanto Agrar Deutschland GmbH).

Davant la complexitat dels fets objecte de qualificació jurídica, el tribunal de remissió va suspendre el procediment i va plantejar un seguit de qüestions prejudicials sobre la interpretació d’algunes disposicions del Reglament (CE) núm. 1829/2003. En particular, i per l’essencial, el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof demana que el Tribunal de Justícia determini si el pol·len de la línia de blat de moro MON 810 que es troba a la mel o és utilitzat com a complement alimentari està inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’esmentat Reglament -sigui com a organisme genèticament modificat o com a aliment genèticament modificat- així com les conseqüències jurídiques de la seva qualificació jurídica de conformitat amb la normativa comunitària<sup>48</sup>.

## D.2. Anàlisi de l’Advocat General

La primera qüestió plantejada pel Bayerischer Verwaltungsgerichtshof està dirigida a dilucidar si el pol·len d’una planta genèticament modificada que queda incorporat a la mel o és utilitzat com a complement alimentari i que, per tant, deixa de poder complir la seva funció en el procés reproductiu de les plantes, pot ser qualificat de ‘organisme’

---

<sup>48</sup> *Ibíd.*, § 63.

en el sentit de l'article 2.1 de la Directiva 2001/18 i de l'article 2.4 del Reglament (CE) número 1829/2003<sup>49</sup>.

Referent a això, l'advocat general Bot s'inclina per recomanar al Tribunal de Justícia una resposta negativa. A l'hora de fonamentar aquesta conclusió, l'advocat general es basa en la circumstància de la pèrdua de capacitat de reproduir-se o de transferir material genètic del pol·len incorporat a la mel, o que ha estat objecte d'un procés de dessecació per la seva utilització com a complement alimentari. D'aquesta manera, aquest pol·len no encaixaria en la definició del terme 'organisme' que ofereix l'article 2.1 de la Directiva<sup>50</sup> —al qual remet l'article 2.4 del Reglament— interpretada en els seus propis termes literals, i a la llum també l'article 3, h ) del Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia, que defineix el concepte de 'organisme viu'<sup>51</sup>. Considera l'Advocat General que la mera presència d'àcid desoxiribonucleic (ADN) de la línia de blat de moro MON 810 a la mel i en el pol·len mort —circumstància que possibilita en principi la seva transferència horitzontal, és a dir, la seva absorció per microorganismes com ara els bacteris— no permet la seva qualificació de 'organisme', en la mesura que el criteri determinant per a aquesta qualificació resideix en la capacitat de reproduir-se o de transferir activament el material genètic<sup>52</sup>. Així doncs, la pèrdua d'aquesta capacitat impedeix la seva qualificació d'organisme i, si s'escau, d'organisme genèticament modificat, encara que contingui material genètic d'aquest tipus d'organisme. No obstant això, correspon a l'òrgan jurisdiccional remitent “... *comprobar, sobre la base de estudios científicos que eventualmente pueda considerar, que el polen utilizado en las condiciones antes mencionadas ya no es una entidad biológica viva*”<sup>53</sup>.

Mitjançant la seva segona qüestió, el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof demana orientació del Tribunal de Justícia sobre la interpretació dels articles 2.10 i 3.1, c) del Reglament (CE) núm. 1829/2003. En primer lloc, vol saber si és suficient perquè un aliment pugui ser qualificat com 'produït a partir d'OMG', que “... *contenga material*

---

<sup>49</sup> *Ibíd.*, § 64.

<sup>50</sup> En dels termes d'aquesta disposició, s'ha d'entendre per 'organisme', als efectes de la Directiva 2001/18/CE, “... *toda entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material genético*”.

<sup>51</sup> En dels termes d'aquesta disposició, s'ha d'entendre per 'organisme viu' als fins del Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia “... *cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides*”.

<sup>52</sup> Veure en particular Conclusions, §§ 84-92.

<sup>53</sup> *Ibíd.*, § 91.



*procedente de plantas modificadas genéticamente que, en un momento anterior, ha tenido una capacidad reproductiva concreta e individual*”<sup>54</sup>. En cas de resposta afirmativa, el tribunal de remissió vol saber en segon lloc si la intencionalitat de la inclusió d’aquest material genètic és un criteri determinant per a la qualificació de l’aliment com ‘produït a partir d’OMG’ en el sentit de l’article 2.10, en relació amb l’article 3.1, c) del Reglament.

Referent a això, l’advocat General proposa una interpretació de dits disposicions en el sentit de considerar dels aliments en qüestió com aliments modificats genèticament, en la mesura que es tractaria d’aliments ‘produïts a partir d’OMG’, sent absolutament irrellevant el grau de intencionalitat present a la inclusió del material genètic d’OMG en aquests.

Per a això, l’Advocat General es basa tant en la definició de ‘ingredient’ que conté l’article 6.4 de la Directiva 2000/13/CE, com en l’annex II de la Directiva 2001/110<sup>55</sup>, relatiu a les característiques de composició de la mel, disposició aquesta última de la qual pot deduir-se que “...*el polen constituye materia orgánica inherente a la composición de la miel. No es un cuerpo extraño, una impureza de la miel, sino un componente normal de ésta que no puede, en principio, ser retirado*”<sup>56</sup>. En aquest sentit, afirma que el procediment de recollida de la mel mitjançant la centrifugació dels panells constitueix una intervenció humana que propicia la barreja del pol·len que s’hi acumula amb la mel, de manera que aquest pol·len pot ser considerat al seu torn com ‘ingredient’ en dels termes de l’article 6.4 de la Directiva 2000/13, com que és una substància utilitzada en la fabricació o en la preparació de la mel, i que encara es troba present en el producte acabat. De tot això es derivaria, en opinió de l’Advocat General, que la simple presència de pol·len del blat de moro MON 810 a la mel implicaria en definitiva la presència d’un ingredient ‘produït a partir d’OMG’ en el sentit de l’article 3.1, c) de l’Reglament 1829/2003 i, per tant, la seva inclusió en l’àmbit d’aplicació del Reglament i, en particular, en el règim d’autorització i supervisió dels aliments modificats genèticament en ell establert<sup>57</sup>.

Segons l’Advocat General, aquesta presència de material genètic derivat d’un OMG com a criteri determinant per a la inclusió de la mel en l’àmbit d’aplicació del

---

<sup>54</sup> *Ibíd.*, § 93.

<sup>55</sup> Directiva 2001/110/CE del Consell, de 20 de desembre de 2001, relativa a la mel (DOUE, L 10, de 12 de gener de 2002, p. 47-52).

<sup>56</sup> Conclusions, § 108.

<sup>57</sup> Veure en particular Conclusions, §§ 98-112.

Reglament és un criteri objectiu, que no depèn de la intencionalitat de la seva inclusió en l'aliment. En els termes utilitzats en les seves conclusions, “... [t]al criterio subjetivo sería contrario al objetivo de protección de la salud humana que persigue dicho Reglamento, en la medida en que el riesgo de un alimento modificado genéticamente puede entrañar para la salud humana es independiente de que la sustancia en cuestión sea introducida de manera consciente o no”<sup>58</sup>.

Finalment, la tercera qüestió prejudicial plantejada pel Bayerischer Verwaltungsgerichtshof va dirigida a esbrinar si seria admissible una interpretació restrictiva dels articles 3.1 i 4.2 del Reglament, en el sentit que la mel, encara que reuneixi els criteris per ser considerada aliment genèticament modificat, no fos sotmesa al règim d'autorització i supervisió d'aquest Reglament, quan la quantitat del material derivat d'una planta genèticament modificada que conté sigui ínfima, just per sobre del llindar de detecció. En particular, el tribunal de remissió pregunta si es podria aplicar analògicament els llindars de tolerància que aquest Reglament estableix respecte de l'obligació d'etiquetatge (article 12.2 Reglament) i de les mesures transitòries en cas de presència accidental o tècnicament inevitable de material modificat genèticament la avaluació de risc hagi estat favorable (article 47.1)<sup>59</sup>.

L'advocat General proposa una resposta negativa a aquesta tercera qüestió. Per a això parteix de la constatació que, a diferència d'altres casos, en què la Comissió ha autoritzat sense restriccions concretes la comercialització d'aliments derivats d'una determinada planta genèticament modificada, en aquest cas només havia autoritzat la comercialització d'un numerus clausus de productes derivats de la línia MON 810, a saber, la farina, el gluten, la sèmola, el midó, la glucosa i l'oli de blat de moro. En aquest sentit, adoptant una posició contrària a les al·legacions de la pròpia Monsanto i del Govern polonès, l'Advocat General opina que l'autorització concedida en virtut de la Directiva 2001/18/CE o de la normativa anterior, la Directiva 90/220/CE no podria cobrir totes les conseqüències de l'alliberament o comercialització d'OMG sense posar en qüestió l'objecte del Reglament (CE) núm. 1829/2003. Per contra, ambdós actes legislatius comunitaris haurien de ser entesos com a complementaris, de manera que “... la autorización concedida al amparo de esa Directiva no prejuzga la

---

<sup>58</sup> *Ibíd.*, § 115.

<sup>59</sup> *Ibíd.*, §§ 127 y 131.

‘evaluación de la seguridad’ de los alimentos modificados genéticamente que debe efectuarse de conformidad con el... Reglamento...”<sup>60</sup>. Tenint en compte això, considera que l’autorització de la comercialització d’un nombre limitat de productes d’alimentació derivats de la línia MON 810 no pot ser assimilada a una autorització general, raó per la qual —no figurant en la llista— la mel que conté pol·len de blat de moro de la dita línia hauria d’obtenir una autorització de comercialització sota el règim del Reglament (CE) núm. 1829/2003. Aquest escull tampoc seria susceptible de ser contornat per via interpretativa, mitjançant una aplicació analògica de les excepcions previstes en dues disposicions específiques del Reglament —els articles 12.2 i 47.1— respecte de supòsits especials, que no admeten una interpretació extensiva sense desvirtuar el règim que estableix aquest acte legislatiu<sup>61</sup>. Així doncs, conclou l’Advocat General per afirmar que

*... corresponde a las autoridades nacionales, en virtud del principio de subsidiariedad, establecer las reglas y procedimientos idóneos para paliar los inconvenientes que pudieran surgir de la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente y de las plantaciones tradicionales cuando la solución de tales inconvenientes no se desprenda directamente del Derecho de la Unión. La indemnización del perjuicio económico sufrido por el apicultor que no puede comercializar sus productos constituye una de esas soluciones*<sup>62</sup>.

### 3.2. Qüestions prejudicials de validesa

Acabem aquesta crònica fent esment a la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 22 de desembre de 2010, assumpte C-77/09, Gowan Comércio Internacional i Services, Lda c. Ministero della Salute. En aquesta sentència, el Tribunal de Justícia resol una qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal administratiu regional del Lazio (Itàlia) en el marc d’un recurs interposat per la societat portuguesa Gowan per obtenir l’anul·lació de l’autorització provisional de comercialització d’un nombre limitat de productes fitosanitaris que continguessin fenarimol, acordada per Ministeri italià de la salut en aplicació de la Directiva 2006/134/CE de la Comissió,

---

<sup>60</sup> *Ibíd.*, § 140.

<sup>61</sup> *Ibíd.*, §§ 150-152.

<sup>62</sup> *Ibíd.*, § 153 (énfasis propio).

d'11 de desembre de 2006, per la qual es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell per tal d'incloure-hi la substància activa fenarimol<sup>63</sup>.

La part actora en el litigi principal funda el seu recurs en la il·legalitat de la Directiva 2006/134, al·legant que les restriccions que imposa l'ús d'aquesta substància com a fungicida en l'agricultura es basen en un error manifest d'apreciació dels estudis científics en la valuació dels riscos. D'altra banda, al·lega que violen el principi de seguretat jurídica, així com els principis de cautela i de proporcionalitat.

A la llum de les dites alegacions i, en la mesura que el procediment previ d'avaluació científica dels riscos havia resultat ser positiu, que la proposta inicial de la Comissió contemplava la inclusió del fenarimol en l'annex I de la Directiva 91/414 sense cap tipus de restriccions, i que aquestes van ser incorporades a la Directiva 2006/134 en el marc del procediment de comitologia, l'òrgan jurisdiccional de remissió va elevar la següent qüestió prejudicial:

*¿Es conforme a Derecho la Directiva 2006/134/CE, que ha limitado significativamente el uso del fenarimol, habida cuenta del resultado de la evaluación técnico-científica realizada por el Estado ponente, que parece llegar a la conclusión de que el riesgo derivado de dicho uso es aceptable?*<sup>64</sup>

Basant-se en una anàlisi detallada dels treballs previs realitzats per la Comissió Europea, en col·laboració amb el Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i de les Sanitat Animal, que van conduir a l'adopció d'aquesta Directiva<sup>65</sup>, el Tribunal de les Justícia rebutja totes i cadascuna de les alegacions realitzades per la part actora en el litigi principal.

D'una banda, considera que els criteris seguits en l'avaluació dels riscos derivats de la utilització de la substància fenarimol per al sistema endocrí i per a la salut humana, que van justificar l'adopció per la Comissió de les mesures contingudes en la Directiva 2006/134, queden plenament coberts per l'article 5.1, b) de la Directiva 91/414/CEE. Així doncs, l'actuació de la Comissió queda en definitiva emparada per una normativa clara i precisa, sobre la base de la qual els justiciables poden conèixer sense ambigüitat els seus drets i obligacions i adoptar en conseqüència les mesures que considerin oportunes<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> DOUE, L 349, de 12 de desembre de 2006, p. 32-36.

<sup>64</sup> Sentència, § 22.

<sup>65</sup> *Ibid.*, §§ 30-44.

<sup>66</sup> *Ibid.*, §§ 47 y 51.

D'altra banda, el Tribunal de Justícia rebutja que les mesures adoptades mitjançant la Directiva 2006/134 es basin en un manifest error d'apreciació dels estudis científics realitzats per a l'avaluació dels riscos de la utilització del fenarimol. Referent a això, el Tribunal s'até a que l'avaluació tècnico-científica realitzada per l'Estat ponent en el procediment per la inclusió d'una nova substància en l'annex I de la Directiva 91/414 -que en el present cas va resultar ser positiva- no és vinculant per a la Comissió ni per al Consell. A més d'això, també va valorar els successius informes complementaris realitzats com a conseqüència de les la sensibilitat demostrada per la Comissió Europea amb les reticències persistents mostrades pels representants de les diversos Estats membres en el Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i de les Sanitat Animal. Sobre aquesta base, el Tribunal conclou que la Comissió havia examinat detingudament i amb imparcialitat les dades científiques aportades en la fase d'avaluació dels riscos de l'ús del fenarimol per a la seva inclusió en l'annex I de les la Directiva 91/414<sup>67</sup>.

En darrer lloc, el Tribunal analitza si les restriccions imposades a la utilització d'aquesta substància excedeixen del necessari per assolir els objectius perseguits per la Directiva 91/414 a la llum dels principis de cautela i de proporcionalitat.

Com recorda el Tribunal, en virtut del principi d' cautela, que és d'aplicació quan les institucions de la Unió adopten mesures de protecció de la salut humana en matèria de política agrícola comuna, es poden adoptar mesures de protecció quan subsisteixen dubtes sobre l'existència o el abast de riscos per a la salut d' les persones, sense necessitat d'esperar que es demostrï plenament la seva realitat i gravetat<sup>68</sup>. Referent a això, el Tribunal de Justícia estima que les reticències i preocupacions expressades pels representants de diversos Estats membres en el Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i de Sanitat Animal no podien ser desestimades com a simples consideracions de naturalesa hipotètica, en la mesura que dites reticències també es basaven en estudis i informes de caràcter científic que posen de manifest importants incerteses sobre l'impacte de l'fenarimol en el sistema endocrí<sup>69</sup>. D'aquesta manera, el Tribunal considera que la submissió de l'autorització d'aquesta substància a

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, § 66.

<sup>68</sup> *Ibid.*, §§ 71-73.

<sup>69</sup> *Ibid.*, § 78.

determinades limitacions en el seu ús queda plenament emparat sota el principi de cautela.

Finalment, en atenció al principi de proporcionalitat, el Tribunal estima que “... sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad [de la Directiva 2006/134]”. No obstant això, el Tribunal no considera que la limitació temporal de 18 mesos de l'autorització amb restriccions adoptada en la Directiva sigui desproporcionada, tenint en compte que la mateixa pot ser renovada i fins i tot ampliada, en funció de l'evolució dels coneixements científics sobre els riscos que comporta la seva utilització en l'agricultura.